



Asamblea General

Septuagésimo cuarto período de sesiones

25^a sesión plenaria

Lunes 4 de noviembre de 2019, a las 10.00 horas

Nueva York

Documentos oficiales

Presidente: Sr. Muhammad-Bande (Nigeria)

Se abre la sesión a las 10.10 horas.

Tema 73 del programa

Informe de la Corte Penal Internacional

Nota del Secretario General (A/74/324)

Informes del Secretario General (A/74/325 y A/74/326)

Proyecto de resolución (A/74/L.8)

El Presidente (*habla en inglés*): Es para mí un placer dar la bienvenida a la Asamblea General al Presidente de la Corte Penal Internacional, Magistrado Chile Eboe-Osuji.

La promoción de la justicia y el derecho internacional siempre ha sido fundamental para la labor de la Asamblea General. Durante la semana de alto nivel, los Jefes de Estado y de Gobierno reiteraron su apoyo a un orden mundial pacífico, próspero y justo basado en un estado de derecho sólido. El Estatuto de Roma sigue siendo un hito en nuestro camino común hacia la justicia internacional. Con su aprobación quedó demostrado el compromiso de los Estados Miembros de poner fin a la impunidad por los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. Es evidente que las actividades emprendidas por la Corte Penal Internacional en cumplimiento de su mandato en virtud del Estatuto de Roma están en consonancia con la labor que realizamos para promover la justicia y el estado de derecho con miras a sostener la paz.

Mientras nos preparamos para conmemorar el 75º aniversario de las Naciones Unidas, debemos reflexionar

sobre lo que hemos logrado en cuanto a la promoción del estado de derecho y comprometernos a superar todos los obstáculos que encontremos en el camino. Un orden internacional basado en normas es la mejor garantía para alcanzar la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y los derechos humanos.

Confío en que, cuando examinemos hoy este tema del programa, recordemos nuestro compromiso común con la justicia y la paz internacionales. Estoy convencido de que juntos lograremos hacer realidad todos esos ideales.

Ahora tengo el honor de invitar al Presidente de la Corte Penal Internacional, Magistrado Chile Eboe-Osuji, a hacer uso de la palabra.

El Magistrado Eboe-Osuji (Presidente de la Corte Penal Internacional) (*habla en francés*): Por segunda vez durante mi mandato como Presidente de la Corte Penal Internacional, tengo el honor de presentar a la Asamblea General el informe anual de la Corte, que se ha distribuido como documento oficial de las Naciones Unidas (véase A/74/324). No entraré en detalles sobre su contenido; me limitaré a presentar una visión general de la situación actual de la Corte, profundizando en algunas cuestiones de actualidad.

(*continúa en inglés*)

Antes de proseguir, quisiera dedicar un momento a felicitar al Excmo. Sr. Tijjani Muhammad-Bande por su elección como Presidente de la Asamblea General. Tengo la suerte de conocerlo personalmente, por lo que me consta que es un hombre cuya gran valía intelectual solo es superada por su capacidad innata para la humildad y

La presente acta contiene la versión literal de los discursos pronunciados en español y la traducción de los demás discursos. Las correcciones deben referirse solamente a los discursos originales y deben enviarse con la firma de un miembro de la delegación interesada, incorporadas en un ejemplar del acta, al Jefe del Servicio de Actas Literales, oficina U-0506 (verbatimrecords@un.org). Las actas corregidas volverán a publicarse electrónicamente en el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (<http://documents.un.org>).

19-34971 (S)



Documento accesible

Se ruega reciclar



su sentido del deber poco común. Con él como Presidente, la Asamblea General está en excelentes manos.

Para comenzar, quisiera expresar el agradecimiento de la Corte a las Naciones Unidas por la asistencia y el apoyo valiosos y constantes que la Organización presta a la Corte, aunque sea a título reembolsable, cuando es necesario. Como se detalla en el informe de la Corte, esta asistencia es amplia e incluye la cooperación en esferas como los servicios de conferencias, el transporte, las comunicaciones, la asistencia médica y los arreglos de seguridad. Esa asistencia, en particular en el contexto de las operaciones sobre el terreno, es realmente fundamental para la labor de la Corte. Por tanto, en nombre de la Corte Penal Internacional, deseo dar las gracias al Secretario General y al personal directivo superior de la Organización por este y por todos los demás tipos de apoyo que brindan a la Corte en el marco de los esfuerzos de todos por alcanzar nuestros objetivos comunes de paz, seguridad, disfrute universal de los derechos humanos, desarrollo y respeto del derecho internacional.

También deseo dar las gracias a los anteriores Presidentes de la Asamblea General por el apoyo político y moral que han brindado a la Corte, en la medida de sus posibilidades. Fui testigo de ese apoyo durante el mandato de la anterior Presidenta de la Asamblea General, Sra. María Fernanda Espinosa Garcés, y ya lo puedo percibir en el mandato del Sr. Muhammad-Bande.

(continúa en francés)

La cooperación de los Estados es igualmente importante para las actividades de la Corte. Estamos sumamente agradecidos por la estrecha cooperación que recibe la Corte de numerosos Estados, ya sea en materia de transmisión de información, de organización de los desplazamientos de los testigos, de acceso a los documentos o de embargos de bienes. Sin embargo, hay una esfera —la ejecución de órdenes de detención— donde la ausencia de una cooperación fructífera supone un importante obstáculo para que la Corte Penal Internacional pueda cumplir con su mandato.

Un aspecto importante de esa situación preocupante se refiere a las Naciones Unidas. Más de la mitad de las órdenes de detención pendientes —ocho, para ser exactos— se refiere a situaciones remitidas a la Fiscal de la Corte por el Consejo de Seguridad. La obligación de las autoridades libias y sudanesas de cooperar plenamente con la Corte emana de las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Insto al Consejo a que adopte medidas concretas para asegurarse de que las

autoridades libias y sudanesas respondan positivamente a las peticiones de cooperación que se les han solicitado, en particular en lo que respecta a la detención y el traslado de los sospechosos que se encuentran fugados.

(continúa en inglés)

Es inaceptable que denuncias de conducta delictiva de la gravedad que revisten esas causas no se sustancien debidamente ante ningún tribunal. Es inaceptable desde el punto de vista de las víctimas, es inaceptable desde el punto de vista de la comunidad internacional y es inaceptable desde el punto de vista del estado de derecho. A este respecto, quisiera subrayar los métodos operacionales generales de la Corte: a cada sospechoso que comparece ante la Corte se le garantiza una audiencia justa, de conformidad con las garantías más sólidas de debido proceso en virtud de las normas internacionales. Esto es algo que cabe recalcar.

Ahora quisiera hacer un breve resumen de las actividades de la Corte durante el último año. Se dictaron veredictos finales —fallos en primera instancia para determinar si el acusado era culpable— en dos juicios contra tres acusados.

Uno de ellos es el juicio del Sr. Bosco Ntaganda, que fue declarado culpable de 18 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el distrito de Ituri de la República Democrática del Congo. La defensa ha presentado un recurso de apelación, que todavía está pendiente.

El segundo de los dos juicios se refiere a las causas contra los Sres. Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé, en relación con las denuncias de violencia electoral en Côte d'Ivoire. La Sala de Primera Instancia absolvió a los dos acusados al término de la presentación de las pruebas de cargo, basándose en lo que los abogados en algunas partes del mundo consideraron acertadamente como “peticiones de inadmisibilidad”. La Fiscal ha recurrido la sentencia, y el recurso está pendiente.

En relación con el tercer juicio, contra el Sr. Dominic Ongwen, prosigue la presentación de pruebas de la defensa. La causa se refiere a las acusaciones por crímenes cometidos en el norte de Uganda.

En lo que respecta a las nuevas causas sometidas a juicio, hace poco se confirmaron los cargos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra el Sr. Al-Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud en relación con actos presuntamente cometidos en Tombuctú (Malí). A la espera del resultado de un recurso pendiente, presentado por la defensa, de la decisión

de confirmación de la Sala de Cuestiones Preliminares, está previsto que el juicio comience el próximo año.

La Corte dictó sus primeras órdenes de detención respecto a la segunda situación en la República Centroafricana sobre la violencia armada que empezó en ese país en 2012. A ese respecto, los Sres. Alfred Yekatom y Patrice-Edouard Ngaïssona fueron trasladados y puestos bajo custodia de la Corte en noviembre y enero pasados, respectivamente. La Sala de Cuestiones Preliminares está deliberando antes de pronunciarse sobre la confirmación de los cargos, respecto de los cuales se celebraron audiencias entre septiembre y octubre.

Además de la labor de la Sección de Cuestiones Preliminares y la Sección de Primera Instancia, la Sala de Apelaciones se mantuvo muy ocupada durante el período del que se informa. Entre los acontecimientos más destacados, la Sala de Apelaciones dictó sentencia sobre una cuestión de cooperación contra el Reino Hachemita de Jordania por no haber ejecutado la orden de detención dictada por la Corte contra el Sr. Omar Al-Bashir, que era Presidente del Sudán en el momento en que se solicitó la cooperación. Se pretendía determinar si la inmunidad que otorgaba el derecho internacional al Presidente Al-Bashir, que era Presidente en ese momento, lo protegía de un arresto.

Después de una audiencia que duró una semana, en la que la Sala de Apelaciones escuchó presentaciones de la Unión Africana y la Liga de los Estados Árabes, así como de varios profesores de derecho con experiencia en la materia, la Sala de Apelaciones dictó su fallo en la causa. En el fallo, la Sala de Apelaciones determinó que, en las circunstancias particulares de la causa, el derecho internacional no reconocía la inmunidad del Sr. Al-Bashir en relación con la Corte. Se trata de un fallo necesariamente extenso que ha aclarado y resuelto la cuestión jurídica en litigio a los efectos de la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional.

Durante el período que abarca el informe, la Fiscal también solicitó autorización judicial para iniciar una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos contra la población rohinyá de Myanmar, que no es un Estado parte en el Estatuto de Roma, si bien durante los hechos las víctimas fueron deportadas a Bangladesh, que sí es Estado parte en el Estatuto. Esa petición se interpuso tras un fallo preliminar de la Sala de Cuestiones Preliminares I a tenor del cual la Corte podía ejercer su competencia si al menos uno de los elementos de un crimen entraba en la competencia de la Corte o si parte de él se había cometido en un Estado parte en el Estatuto de Roma.

En relación con el Afganistán, la Sala de Cuestiones Preliminares rechazó la solicitud de autorización interpuesta por la Fiscal para abrir una investigación sobre la situación. Desde entonces, esa decisión ha sido recurrida por la Fiscal y algunos representantes de las víctimas. El recurso está pendiente ante la Sala de Apelaciones. La solicitud de la Fiscalía en esta situación se basa en la teoría de que los presuntos hechos habían ocurrido en el territorio del Afganistán, que es un Estado parte en el Estatuto de Roma, o que las supuestas violaciones también se habían producido en el territorio de otros Estados que son partes en el Estatuto de Roma.

Como sin duda sabe la Asamblea, esa cuestión ha suscitado mucha controversia respecto a la Corte, en particular por parte de los representantes de los grupos de víctimas, que se sintieron profundamente decepcionados por la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares. Sin embargo, mi informe sobre la cuestión quedaría necesariamente incompleto si en el acta de la Asamblea no se menciona que la controversia también fue suscitada por la amenaza política directa que dirigieron contra la Corte el ex Asesor de Seguridad Nacional y el Secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, respectivamente. Estos hechos lamentables están fuera de lugar en cualquier sociedad donde prevalezca el estado de derecho. No obstante, la Corte debe realizar su labor sin dejarse intimidar por amenazas y controversias, ya procedan de víctimas profundamente decepcionadas por decisiones que no son de su agrado o de funcionarios estatales ansiosos por impedir la adopción de una decisión que no quieren. La comunidad internacional y cada uno de sus miembros deben velar por que no se profieran amenazas de ningún tipo contra la independencia que la Corte necesita para cumplir con su mandato al servicio de la humanidad.

La Fiscal concluyó el examen preliminar en el Gabón y constató que la información disponible no allegaba un fundamento razonable para estimar que se hubieran cometido crímenes que cayeran dentro de la competencia de la Corte. Por lo tanto, la Fiscal declinó iniciar una investigación. La Fiscalía está realizando exámenes preliminares respecto a ocho posibles situaciones e investigando 11 situaciones.

Quisiera decir unas palabras sobre la labor que se está llevando a cabo en materia de justicia reparadora en el marco del sistema del Estatuto de Roma. Más de 10.000 víctimas han sido seleccionadas para participar en las actuaciones de la Corte Penal Internacional y solicitar reparación por el daño que han sufrido. Este nuevo enfoque de justicia reparadora representa

un importante cambio de paradigma, que contrasta con los procesos de los tribunales especiales para Rwanda y la ex-Yugoslavia, centrados casi exclusivamente en la justicia punitiva. El Fondo Fiduciario para las Víctimas que gestiona la Corte Penal Internacional está ejecutando las primeras órdenes judiciales sobre reparaciones.

En la causa del Sr. Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi, que se declaró culpable del crimen de guerra de destrucción de monumentos religiosos en Tombuctú (Mali), los magistrados impusieron una serie de medidas de reparación adecuadas a las circunstancias de la causa, entre otras, la asignación de indemnizaciones individuales a las personas cuyos medios de vida dependían de los sitios protegidos, medidas simbólicas para que se reconozca públicamente el daño moral sufrido, medidas comunitarias destinadas a restablecer la actividad económica perdida y la difusión de la disculpa del Sr. Al-Mahdi en los idiomas hablados en Tombuctú. En otra causa, la del Sr. Germain Katanga, los magistrados dictaminaron el pago de una indemnización monetaria a las personas como medida simbólica, así como una reparación colectiva en forma de apoyo psicológico y la prestación de apoyo a la vivienda, las actividades remunerativas y la educación.

La idea general es que las medidas de reparación se destinen específicamente a reparar el daño que han sufrido las víctimas como consecuencia de los crímenes por los que la Corte considera al acusado culpable. Si el acusado tiene medios económicos, se utilizarán para hacer efectivas las reparaciones. Si, por el contrario, el acusado, o acusada es indigente, el Fondo Fiduciario para las Víctimas puede utilizar las donaciones voluntarias recibidas de los Gobiernos y los donantes privados para proporcionar reparación a las víctimas.

Por otra parte, más allá de los detalles específicos de las causas que se juzgan en la sala, cientos de miles de víctimas en Uganda y la República Democrática del Congo se han beneficiado de los programas del Fondo Fiduciario para las Víctimas en el marco de su mandato de asistencia. El mandato de asistencia describe el aspecto de la labor del Fondo Fiduciario, que procura socorrer a las víctimas evidentes de los crímenes, dejando de lado las consideraciones sobre la culpabilidad del autor por los daños que sufrieron las víctimas. El Fondo Fiduciario está ampliando el alcance de su mandato de asistencia a la República Centrafricana y está estudiando la posibilidad de poner en marcha proyectos similares en otros países.

Debo señalar que la capacidad del Fondo Fiduciario para obtener resultados depende en gran medida de

sus recursos financieros. En ese sentido, insto encarecidamente a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que aporten contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario para las Víctimas a fin de apoyar su importante labor a ese respecto.

Permítaseme reiterar en este contexto los valores y dividendos esenciales que aporta la Corte a nuestro mundo. A ese respecto, debo señalar que apenas unas semanas antes de la aprobación del Estatuto de Roma en 1998, el Presidente Nelson Mandela recordó al mundo que los seres humanos ya se han hecho suficiente daño entre ellos, y señaló que muchas de esas atrocidades hubieran podido evitarse, o al menos se podrían haber reducido, si hubiera existido un tribunal penal internacional efectiva que funcionase. Ahora tenemos esa Corte Penal Internacional permanente que deseaba Madiba —un mecanismo permanente para asegurarse de que en el futuro rindan cuentas quienes sometan a otras personas a atrocidades como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y, por supuesto, el crimen de agresión, respecto del cual la Corte tiene ahora competencia. En sus 17 años de funcionamiento, la Corte ha hecho mucho más de lo que muchos habían imaginado que podría hacer. De hecho, la Corte ha cambiado de manera fundamental la consideración a nivel mundial de la rendición de cuentas por esos crímenes atroces.

Recordemos lo que el ex Secretario General Kofi Annan dijo con ocasión de la aprobación del Estatuto de Roma:

“hasta ahora, cuando los poderosos cometían crímenes de lesa humanidad, sabían que, mientras se mantuvieran en el poder, ningún tribunal terreno podía juzgarlos”.

Esa observación refleja el propósito esencial de la Corte y su valor duradero para la humanidad. Con la Corte Penal Internacional permanente en funcionamiento, incluso los más poderosos —que suelen ser varones— ya no pueden estar seguros de que saldrán impunes si cometen los crímenes atroces que prohíbe el Estatuto de Roma contra otros seres humanos.

Incluso cuando las circunstancias reinantes parezcan amparar la impunidad, ahora los autores y sus cómplices tendrán que reconocer que, en la práctica, su impunidad siempre será ilícita a los ojos del mundo y no podrá perdurar mientras tengamos una Corte Penal Internacional permanente, que se ocupará de la rendición de cuentas a largo plazo en el plano internacional cuando sus preguntas no obtengan respuesta en los países de origen. Puede haber resistencia, o incluso amenazas estridentes,

contra quienes plantean esas preguntas, pero mientras la Corte esté en pleno funcionamiento, esas preguntas se plantearán en algún momento, y vendrán acompañadas del correspondiente poder de disuasión que aporta la Corte. La disuasión es un valor en el que no se puede insistir lo suficiente. Hay muchas razones para insistir en que la mera existencia de este mecanismo judicial permanente de rendición de cuentas cumple realmente su función, como mínimo, de obstáculo incómodo para la libre voluntad de quienes son propensos a cometer crímenes inhumanos en una escala masiva o generalizada.

El valor de la Corte Penal Internacional en ese sentido es especialmente evidente en el contexto de las elecciones en África —la región de donde provengo— donde la violencia se utilizaba históricamente con demasiada frecuencia como medio para obtener el poder político, en la forma de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, lo cual constituye, en esencia, un crimen de lesa humanidad. Desde la creación de la Corte Penal Internacional y sus primeras causas relativas a la violencia electoral, se ha producido una reducción considerable de la incidencia de la violencia electoral que suele arruinar la experiencia democrática cuando se recurre a la violencia para lograr el poder en nombre de la democracia.

Como sabrán algunos de los presentes, fui el magistrado principal en una causa relacionada con la violencia desatada después de las elecciones en 2007 y 2008. En relación con esa causa, escuchamos testimonios de un perito judicial, que declaró que antes de las elecciones en cuestión, las elecciones celebradas en el pasado en el país siempre se habían visto afectadas por incidentes violentos, que tendían recrudecerse en las elecciones sucesivas. Sin embargo, tras el inicio de los procedimientos de la Corte relativos a la violencia en 2007 y 2008, en las elecciones sucesivas en ese país se ha registrado un acusado descenso de los casos de violencia electoral.

Varios dirigentes de Estado, Ministros de Gobiernos y dirigentes de la sociedad civil me han comunicado que la existencia de la Corte Penal Internacional y su labor han sido muy importantes y positivas para prevenir el derramamiento de sangre en el contexto de las elecciones en sus países. Ello se debe a que todos han podido comprobar que quienes tengan intención de cometer todos esos actos de violencia podrían terminar ante la Corte para responder por sus actos. Ese valor disuasorio por sí solo hace que compense la inversión en la Corte, así que quienes financian las operaciones de la Corte pueden estar seguros de que su dinero no se ha malgastado.

Sin embargo, el valor crucial de la Corte va más allá de esos logros. Cabe destacar que la Corte también tiene valor un palpable en el desarrollo económico y humano sostenible, en el que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible insiste acertadamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.

La propuesta es bastante sencilla: no puede haber desarrollo sostenible allá donde imperan los conflictos, las atrocidades y el miedo. Puede que algunos miembros de la Asamblea me lo hayan oído decir antes, pero la importancia de la cuestión merece su reiteración: el desarrollo socioeconómico seguirá siendo una quimera cuando las personas mueren o resultan heridas y traumatizadas de por vida debido a la violencia de los conflictos armados; cuando millones de personas no pueden trabajar a causa de la desaceleración económica que causa la guerra; cuando los agricultores no pueden trabajar sus tierras a causa de las operaciones militares o las minas terrestres; cuando los empresarios no pueden hacer negocios debido a las asoladoras guerras que siempre provocan la destrucción de la infraestructura económica; cuando los niños no pueden asistir a la escuela a causa de la guerra; cuando recursos valiosos, que ya escasean en muchos casos, se malgastan en armamentos, en lugar de invertirse en educación, atención de la salud y sostenibilidad económica; cuando a los inversores los ahuyentan la inestabilidad y el conflicto; cuando los mejores cerebros de los países se ven obligados a huir en masa en búsqueda de países más seguros, o cuando los países vecinos, e incluso los que están mucho más lejos, se ven obligados a hacer frente como pueden a las oleadas de refugiados que huyen de países en guerra.

Este año, el Ministro de Economía libio explicó cómo el conflicto actual en Libia ha dañado gravemente la infraestructura del país y ha destruido más de 40.000 millones de dólares solo de las reservas de divisas libias. Ese testimonio confirma lo que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial vienen diciendo desde hace mucho tiempo acerca de las relaciones entre los conflictos armados y el desarrollo económico. Según un importante estudio publicado por el Banco Mundial, el *Informe sobre el Desarrollo Mundial de 2011*:

“El costo medio de una guerra civil equivale a más de 30 años de crecimiento [del producto interno bruto] de un país en desarrollo de tamaño mediano. Hacen falta 20 años para recuperar el volumen de comercio anterior a un gran episodio de violencia”.

Además, estas consecuencias negativas no se detienen en las fronteras nacionales. Cabe destacar que las

consecuencias de los conflictos no solo impiden el crecimiento en los países directamente involucrados en la guerra, sino que también impiden el desarrollo regional, además de causar los problemas de migración a los que me referí anteriormente.

También podríamos detenernos a examinar en qué otras formas el precio de la guerra puede ser aún más desalentador, teniendo en cuenta que, según los cálculos, el costo total de las dos guerras mundiales fue de unos 20 billones de dólares en la moneda actual, que es alrededor del 25 %, o un cuarto o una cuarta parte, del producto interno bruto total de todas las naciones del mundo juntas. Se trata de unas sumas de dinero casi inconcebibles en cualquier momento de la historia, y es el dinero que se desperdició en tan solo dos guerras. Debemos pensar en lo que han costado todas las demás guerras además de las dos guerras mundiales.

No cuesta nada ver cómo se habría beneficiado la humanidad si todo ese dinero se hubiera invertido en la búsqueda de soluciones a algunos de los problemas más insolubles del mundo a través de la ciencia, la educación y el desarrollo. Podríamos imaginar, por ejemplo, qué sucedería si esos mismos 20 billones de dólares se hubiesen invertido en aportar más fondos para la investigación, digamos, del cáncer de mama y otros tipos de cáncer y otras enfermedades que nos parten el alma todos los días.

Todo esto para decir que prevenir los conflictos y las atrocidades que conllevan y abordarlos directa y resueltamente mediante el estado de derecho constituye un objetivo de una gran importancia para los aspectos más esenciales de la vida humana, como el desarrollo económico. Es un objetivo para todo el mundo; ningún Estado puede resolverlo por sí solo, y menos quedarse al margen por mucho tiempo. En este sentido, debo recalcar que no existe ninguna barrera lo suficientemente fuerte, profunda, alta o arriesgada como para mantener a un país permanentemente aislado de la marea de miseria que se desata sistemáticamente en las circunstancias en las que se cometen crímenes prohibidos por el Estatuto de Roma y cuando no existe un mecanismo internacional para insistir en la rendición de cuentas a largo plazo.

Como instrumento multilateral, el Estatuto de Roma contribuye a hacer de nuestro mundo un lugar mejor, aunque solo sea para subsanar las lagunas de forma procesable. Lo hace criminalizando las guerras de agresión y aumentando el riesgo de enjuiciamiento penal cuando se cometen crímenes de guerra —como sucede

inevitablemente en cada guerra— en el marco de los conflictos armados, sin importar quién disparó primero ni cuándo se cometieron los crímenes de lesa humanidad y genocidio, ya que a menudo se cometen al amparo de conflictos armados. De ese modo, la Corte ejerce la necesaria presión contra la mentalidad de aquellos a quienes no les importa sumir a su propio pueblo y a otros en conflictos armados por motivos egoístas.

Todos deben tener acceso a la justicia, como se nos insta a garantizar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. Sin embargo, en la actualidad hay más de 70 Estados Miembros de las Naciones Unidas que no son parte en el Estatuto de Roma. En la práctica, esto significa que algunos de los trágicos conflictos que acaparan la atención mundial y sacuden su conciencia quedan simplemente fuera del alcance de la Corte Penal Internacional cuando se cometen crímenes atroces en los territorios de los Estados que no han ratificado el Estatuto de Roma o se han adherido a él. En otras palabras, las víctimas de esas atrocidades se quedan desamparadas fuera de la zona de justicia punitiva y reparadora creada por el sistema del Estatuto de Roma. Por consiguiente, son víctimas por triplicado: por las atrocidades que han sufrido en primer lugar, por la impunidad de que aparentemente gozan los autores en ausencia de una corte internacional de último recurso y por la ausencia de cualquier atisbo de reparación que haya establecido el sistema del Estatuto de Roma.

En momentos como estos, debo hacerme eco de las palabras del Presidente Buhari de Nigeria:

“Insto a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que, como cuestión de política estatal deliberada, se adhieran al Estatuto de Roma a fin de que este pase a ser un tratado universal”.

No se trata solo de una cuestión de interés para un determinado Estado, aunque los beneficios generales de la disuasión en particular son evidentes. También se trata de contribuir a la consecución de los objetivos colectivos de la humanidad. Cada ratificación añade otro ladrillo al muro que protege a la humanidad de los delitos más graves imaginables. Cada ratificación contribuye a reducir el margen de impunidad y cada ratificación es una contribución al pozo de reparaciones y asistencia que pueden utilizarse de manera organizada y sistemática para calmar la sed de justicia de las víctimas, aunque sea de forma simbólica, cuando todo lo demás falla.

(continúa en francés)

Una vez más, doy las gracias a los presentes por su atención y les deseo un período de sesiones muy fructífero.

El Presidente (*habla en inglés*): Tiene ahora la palabra al representante de los Países Bajos, quien presentará el proyecto de resolución A/74/L.8.

Sr. Van Oosterom (Países Bajos) (*habla en inglés*): El Reino de los Países Bajos se adhiere a la declaración que formulará hoy el observador de la Unión Europea.

También queremos agradecer al Presidente Eboe-Osuji su presentación y manifestarle nuestro reconocimiento por sus constantes esfuerzos y los de su equipo para apoyar a la Corte Penal Internacional. En el informe anual de la Corte Penal Internacional (véase A/74/324) se ofrece una visión general clara de la considerable labor llevada a cabo durante el período que abarca el informe y de los desafíos futuros. El Reino de los Países Bajos es el país anfitrión de la Corte Penal Internacional y un firme defensor de su labor.

Habida cuenta de la gran importancia del tema que nos ocupa, permítaseme abordar las tres cuestiones siguientes: en primer lugar, la lucha contra la impunidad; en segundo lugar, el fortalecimiento de la Corte, y, en tercer lugar, la cooperación.

En primer lugar, la lucha contra la impunidad es una de las principales prioridades de la política exterior holandesa. Los responsables de estos delitos deben comparecer ante la justicia. Lamentablemente, la rendición de cuentas y el derecho penal internacional están sometidos a fuertes presiones y afrontan resistencias políticas en estos momentos. El Consejo de Seguridad se ve muchas veces paralizado por el uso del veto en esas cuestiones, y debido al uso del veto, no ha podido exigir cuentas a los autores de atrocidades en masa en las situaciones en que más se necesita. Siria es un lamentable ejemplo de ello. La Corte Penal Internacional es un tribunal creado por los Estados. Por desgracia, no todos los Estados están dispuestos a unirse a nuestra lucha contra la impunidad, pero seguimos tratando de lograr su universalidad. Mientras tanto, no podemos sentarnos a esperar. Debemos asegurarnos de que la Corte Penal Internacional está haciendo todo lo que puede.

En segundo lugar, con respecto al fortalecimiento de la Corte, como he dicho, los Países Bajos son un firme defensor de la Corte Penal Internacional. Esta encarna la idea de que los delitos más graves conciernen a toda la comunidad internacional. Esos delitos no pueden quedar impunes. La Corte Penal Internacional es una organización indispensable en la lucha contra la impunidad, y por lo tanto, debemos fortalecerla. Debemos hacerla más eficiente, con sentencias de alta calidad y la capacidad de hacerse más fuerte frente a la presión de

los Estados que no son parte. No podemos permitir que los Estados que no son parte dificulten la rendición de cuentas por los peores delitos internacionales que enjuicia la Corte.

El Reino de los Países Bajos está a favor de adoptar medidas para fortalecer a la Corte a través de la Asamblea de los Estados Partes, por ejemplo, mediante un examen más estricto de la idoneidad de todos los candidatos antes de que se elija a los magistrados. Además, estamos a favor de que expertos independientes revisen exhaustivamente el funcionamiento de la Corte. De ese modo, tendremos una idea clara de los mayores desafíos actuales y de cuáles son los mejores medios para hacerles frente.

En tercer lugar, debemos examinar con más ojo crítico nuestra cooperación como Estados y órganos de las Naciones Unidas con la Corte en la ejecución de su mandato. En nuestra opinión, todos los Estados deben colaborar con la Corte. Deben ejecutar las órdenes de detención pendientes en consonancia con sus obligaciones en virtud del Estatuto de Roma o de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Además, la cooperación voluntaria de los Estados es fundamental para el funcionamiento eficaz y eficiente de la Corte.

Una forma de apoyar en la práctica a la Corte en ese sentido es concertando acuerdos marco relativos a la reubicación de testigos, liberando a personas y ejecutando las sentencias. Además, los casos de incumplimiento deben abordarse mediante la adopción de medidas concretas por parte de los Estados partes y del Consejo de Seguridad. Asimismo, hacemos un llamamiento al Consejo de Seguridad para que haga un seguimiento de las situaciones que ha remitido a la Corte Penal Internacional e intensifique su colaboración con ella. Los Estados partes deben apoyar y facilitar la labor de la Corte durante las diversas etapas de sus procedimientos judiciales.

Será fundamental atender todo lo anterior lo antes posible, con miras a adoptar una decisión concreta en la Asamblea de los Estados partes que tendrá lugar en 2020 aquí en Nueva York, en la que también tenemos que elegir a un nuevo Fiscal y seis nuevos magistrados. Espero que todos los Estados puedan respaldar las medidas necesarias para reforzar a esa importante institución, y hago un llamamiento a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho para que ratifiquen el Estatuto de Roma y se sumen a nosotros para luchar contra la impunidad. Nuestra ambición sigue siendo la universalidad: todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas deberían pasar a ser Estados partes.

Para concluir, tengo el honor de presentar el proyecto de resolución que figura en el documento A/74/L.8. En el proyecto de resolución se acoge con beneplácito el último informe de la Corte sobre sus actividades. También se reconoce el papel de la Corte Penal Internacional en un sistema multilateral que trata de poner fin a la impunidad, promover el estado de derecho, fomentar y alentar el respeto de los derechos humanos, alcanzar una paz sostenible e impulsar el desarrollo de las naciones, de conformidad con el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Presento el proyecto de resolución a la Asamblea General para que lo apruebe sin someterlo a votación, y doy sinceramente las gracias a todos los Estados que lo han copatrocinado. El número de copatrocinadores es una señal clara de la importancia que los miembros atribuyen al informe anual de la Corte Penal Internacional.

Sra. Eneström (Suecia) (*habla en inglés*): Tengo el honor de hablar en nombre de los cinco países nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y mi propio país, Suecia.

Quisiera comenzar dando las gracias a la Corte Penal Internacional por su informe anual a las Naciones Unidas (A/74/324). Doy también las gracias al Presidente de la Corte Penal Internacional, Magistrado Chile Eboe-Osuji, por su detallada presentación de las principales cuestiones sobre las que versa el informe.

Se están cometiendo impunemente crímenes atroces en muchos conflictos y situaciones en todo el mundo. La Corte Penal Internacional y su mandato vital de procurar que los autores de los delitos más graves rindan cuentas y de hacer justicia a las víctimas, respetando al mismo tiempo el principio de complementariedad, siguen siendo indispensables para la justicia internacional. La Corte Penal Internacional también desempeña un papel importante en la promoción de un orden basado en normas y puede contribuir a lograr avances en la consolidación de la paz y la reconciliación después de los conflictos.

Sin embargo, en la actualidad la Corte afronta una serie de problemas. La Asamblea de los Estados partes en el Estatuto de Roma y la Corte debe resolver dichos problemas con rapidez, eficacia y eficiencia, de manera que mejoren continuamente sus resultados y repercusiones, entre otras cosas haciendo un uso responsable de los recursos conforme a unas prioridades. Los países nórdicos aplauden la labor que están llevando a cabo los Estados partes, la Corte y la sociedad civil a este respecto. La Corte debe poder trabajar de forma

independiente e imparcial, y los países nórdicos la apoyan en este sentido. Es necesario afianzar el sistema del Estatuto de Roma y la Corte para hacer frente a esos desafíos, con el fin de hacer realidad el ideal de los redactores del Estatuto.

La universalidad es la esencia de la promesa de la Corte y, en términos más generales, de la justicia internacional. Al aumentar el número de Estados partes, la Corte estará en mejores condiciones de abordar los delitos internacionales más graves con una mayor coherencia y un mayor efecto. Los países nórdicos siguen apoyando la adhesión universal al Estatuto de Roma. Estamos dispuestos a entablar un diálogo constructivo sobre las dificultades experimentadas por algunos Estados partes en sus relaciones con la Corte Penal Internacional. Cumpliendo con nuestras obligaciones estatutarias, alentamos a mantener debates constructivos sobre los ámbitos en los que la actuación de la Corte puede seguir mejorando. Mantener un diálogo constante revisite una importancia fundamental.

La eficacia de la Corte en el cumplimiento de su mandato depende en gran medida de la cooperación con los Estados, otros interesados y las organizaciones internacionales. Quisiera señalar en este foro la constante colaboración que mantienen las Naciones Unidas y la Corte, tal como se describe en el informe. Compartimos la profunda gratitud de la Corte por el apoyo y la cooperación cruciales que brinda la cúpula de las Naciones Unidas. También acogemos con satisfacción la ayuda que recibe la Corte de otros departamentos, entidades y oficinas de las Naciones Unidas y de los asesores y representantes especiales del Secretario General. Sigue siendo muy importante incorporar a la Corte en el sistema de las Naciones Unidas recogiendo manifestaciones de reconocimiento y apoyo de sus actividades en informes, resoluciones, declaraciones y otros documentos aprobados por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y otros órganos de las Naciones Unidas.

Sigue siendo necesario aumentar la cooperación entre la Corte y el Consejo de Seguridad. Esto es especialmente cierto en los casos de falta de cooperación con la Corte, al igual que la necesidad de aumentar el seguimiento de las situaciones remitidas a esta por el Consejo de Seguridad. Tras la remisión de las situaciones en Darfur y Libia, observamos que la Corte informa de que ha comunicado 15 casos de falta de cooperación de los Estados al Consejo, pero que este no ha respondido a dichos comunicados de forma sustantiva. Instamos enérgicamente a todos los Estados a cooperar de forma plena y eficaz con la Corte, de conformidad con

el Estatuto de Roma y todas las resoluciones sobre la materia del Consejo de Seguridad.

También observamos con gran preocupación que el Consejo de Seguridad no haya podido remitir la situación de Siria a la Corte Penal Internacional. Instamos encarecidamente a los miembros del Consejo a continuar sus esfuerzos en este sentido. En lo referente a la situación en Siria, los países nórdicos seguirán apoyando específicamente la labor del Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para Ayudar en la Investigación y el Enjuiciamiento de los Responsables de los Delitos de Derecho Internacional Más Graves Cometidos en la República Árabe Siria desde Marzo de 2011. Alentamos a otros a hacer lo mismo.

La situación en Myanmar, y en particular las denuncias de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que se han cometido en el estado de Rakáin siguen siendo motivo de profunda preocupación. Consideramos muy preocupantes las conclusiones que figuran en el último informe de la misión de determinación de los hechos sobre Myanmar. Instamos a las autoridades de Myanmar a llevar a cabo investigaciones dignas de crédito siguiendo las normas internacionales. El establecimiento por parte del Consejo de Derechos Humanos del Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar para reunir, consolidar, conservar y analizar pruebas de los delitos internacionales y las violaciones del derecho internacional más graves cometidos en Myanmar desde 2011 fue otro paso importante con respecto a la rendición de cuentas. Sin embargo, la mejor forma de lograr que se rindan cuentas en Myanmar sigue siendo que el Consejo de Seguridad remita la situación a la Corte.

La plena realización de los derechos de las víctimas es un aspecto importante del éxito y la pertinencia constantes de la Corte. Encomiamos la importante función que desempeña el Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional para las Víctimas. Reconocemos su labor de ofrecer apoyo y rehabilitación a las víctimas de delitos sexuales y de género. Los países nórdicos siempre han respaldado el Fondo Fiduciario, y alentamos a los Estados y otras entidades a que también contribuyan al Fondo.

Permítaseme también aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento a la Fiscal y su incansable labor para administrar justicia por los crímenes atroces. Encomiamos su labor en la lucha contra los delitos de violencia sexual y de género y los crímenes atroces cometidos contra los niños, o que les afectan de alguna manera.

Para que la Corte pueda llevar a cabo su misión de la manera más eficiente posible también debe contar con la financiación necesaria. El presupuesto de la Corte es un tema que se tratará en la Asamblea de los Estados Partes de este año, pero queremos destacar las actividades que realiza la Corte en todo el mundo y su gran volumen de trabajo, como se refleja en el informe de la Corte. Nuestra responsabilidad común es velar por que la Corte disponga de los recursos suficientes para desempeñar su importante mandato en un momento en que la demanda va en aumento. De la misma forma, la Corte tiene la obligación de garantizar su funcionamiento eficaz y eficiente.

Quisiera concluir renovando la promesa de que los países nórdicos seguiremos siendo fervientes partidarios de la Corte Penal Internacional. Nos comprometemos a continuar trabajando en pro de la eficacia, independencia e integridad de la Corte.

El Presidente (*habla en inglés*): Tiene ahora la palabra el observador de la Unión Europea.

Sr. Chaboureau (Unión Europea) (*habla en francés*): Tengo el honor de hablar en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Albania, países candidatos, y Bosnia y Herzegovina, país del Proceso de Estabilización y Asociación y candidato potencial, así como Ucrania, la República de Moldova y Georgia se suman a esta declaración.

Quisiéramos dar las gracias al Presidente de la Corte Penal Internacional, Magistrado Chile Eboe-Osuji, por su detallada exposición informativa. También damos las gracias a la Corte por su informe anual a las Naciones Unidas (véase A/74/324) correspondiente al período comprendido entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019, que fue otro año caracterizado por numerosos acontecimientos importantes.

La Unión Europea y sus Estados miembros expresan su apoyo inquebrantable a la Corte Penal Internacional como institución fundamental para promover un orden mundial basado en normas, alcanzar una paz duradera y garantizar que quienes cometen delitos o violaciones rindan cuentas por sus actos. La Corte sigue siendo un importante garante del respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en todos los países y desempeña una potente función disuasoria. Asimismo, destacamos la importancia de la Corte en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, ya que consideramos que un requisito indispensable para lograr el desarrollo sostenible y la estabilidad es que existan unas instituciones judiciales fuertes.

Tomamos nota de que, en el período abarcado por el presente informe, se han registrado algunos progresos importantes en la jurisprudencia y se ha avanzado en varios procesos judiciales, así como en los exámenes preliminares y las investigaciones en curso, que, entre otras cosas, permitieron que se emitiesen dos nuevas órdenes de detención. El ámbito geográfico de las actividades de la Corte y el aumento de las comunicaciones con ella demuestran que la mayoría de los Estados siguen considerando que la Corte Penal Internacional es un punto de referencia para la defensa de la justicia y la rendición de cuentas. También nos congratulamos del compromiso del Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional para las Víctimas de ejecutar los mandatos de indemnización para las víctimas de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional, las familias y las comunidades.

Durante el período sobre el que se informa, la labor desempeñada por la Corte consistió en la investigación por parte de la Fiscalía de 11 casos, con diez exámenes preliminares y tres juicios en curso. La Fiscalía también ha realizado un número considerable de visitas a varios países de todo el mundo.

Para que la Corte pueda gestionar su carga de trabajo sustancial y seguir siendo una institución moderna y eficaz para hacer frente a los desafíos actuales, es imperativo que evolucione y se adapte a esos nuevos desafíos y que sea lo más eficaz posible. Acogemos con agrado y apoyamos todos los esfuerzos encaminados a revisar y racionalizar los procesos administrativos y judiciales de la Corte y optimizar el uso de los recursos disponibles.

Todavía quedan varios desafíos graves por resolver para que la Corte funcione debidamente. Acogemos con agrado la asistencia prestada por los Estados con respecto a las investigaciones y los enjuiciamientos y otras peticiones transmitidas por la Corte, e insistimos en que sigue siendo esencial una estrecha cooperación con la Corte Penal Internacional. Nos preocupa particularmente el hecho de que la detención y entrega de personas bajo mandatos de la Corte sigan siendo un problema. Instamos a todos los Estados a que adopten medidas para promover una cooperación plena y adecuada con la Corte, entre otras cosas, mediante el cumplimiento sin demora de las órdenes de detención y la concertación de acuerdos de cooperación voluntarios con la Corte sobre la ejecución de las condenas, la liberación provisional o definitiva de los sospechosos y la reubicación de los testigos, que son esenciales para la eficacia de la Corte.

La Unión Europea y sus Estados miembros están plenamente de acuerdo con la Corte en que la facultad

del Consejo de Seguridad para remitir situaciones a la Corte puede ayudar a promover la rendición de cuentas en los países en los que se podrían haber cometido los delitos más graves que afectan a la comunidad internacional, pero en los que la Corte no tiene competencia. En ese sentido, destacamos también que es necesario que el Consejo dé un riguroso seguimiento a esas situaciones para garantizar la cooperación con la Corte cuando el Consejo le remita una causa.

El Estatuto de Roma se centra en el principio de la complementariedad, en virtud del cual los propios Estados tienen la responsabilidad primordial de llevar a los sospechosos ante la justicia. La Unión Europea sigue comprometida con la aplicación de ese principio básico a través de sus diversos instrumentos de asistencia y sus distintos proyectos, en particular a través de sus programas para mejorar las capacidades jurídicas y judiciales de los países, como parte de sus esfuerzos por fortalecer el estado de derecho. La ratificación universal del Estatuto de Roma sigue siendo nuestro objetivo a largo plazo. Durante el período que abarca el informe, la Unión Europea prosiguió sus esfuerzos dirigidos a promover la universalidad del Estatuto de Roma y el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, así como una mejor comprensión del mandato de la Corte. La Unión Europea y sus Estados miembros reafirman su determinación de recabar la participación más elevada posible en el Estatuto de Roma y de preservar su integridad, junto con los Estados partes, las organizaciones internacionales y regionales y la sociedad civil.

La Unión Europea ha expresado en repetidas ocasiones su firme convicción sobre la legitimidad de la Corte y su plena confianza en la imparcialidad y la independencia de los magistrados y el Fiscal de la Corte Penal Internacional en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 42 del Estatuto de Roma. La Unión Europea sigue comprometida con la defensa de la Corte contra toda injerencia externa encaminada a obstruir el ejercicio de la justicia y socavar el sistema de justicia penal internacional. La Unión Europea y sus Estados miembros seguirán afirmando su apoyo a la Corte en los foros multilaterales y los diálogos bilaterales y prestando una asistencia política, técnica y financiera coherente a la Corte. Nuestros esfuerzos conjuntos harán que la Corte sea verdaderamente universal y fuerte y la convertirán en una Corte que sea capaz de exigir a los responsables de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional que rindan cuentas y de dar voz e infundir una nueva esperanza a las víctimas inocentes.

Sr. Węckowicz (Polonia) (*habla en inglés*): Polonia se asocia a la declaración formulada por el observador de la Unión Europea en nombre de sus Estados miembros. Quisiéramos hacer las siguientes observaciones adicionales a título nacional.

Ante todo, quisiéramos expresar nuestro agradecimiento al Presidente de la Corte Penal Internacional, Magistrado Chile Eboe-Osuji, por haber informado a la Asamblea General acerca del informe anual de la Corte (véase A/74/324). En el informe se da cuenta del ingente trabajo de la Corte y se demuestra que ocupa un lugar destacado en la estructura de justicia penal internacional. Sin embargo, aún no ha alcanzado el lugar previsto para ella por los signatarios del Estatuto de Roma. El mundo observa a la Corte Penal Internacional con esperanza e inquietud. Los Estados partes en el Estatuto de Roma con frecuencia la observan con esperanza, mientras que los Estados que no son partes con frecuencia piensan en ella con inquietud. Estos últimos reconocen el papel de la Corte y cooperan con ella ocasionalmente, pero a veces cuestionan la finalidad misma de su existencia. Esperamos que la labor diligente y sistemática de la Corte y su abundante jurisprudencia contribuyan a que estos últimos Estados cambien de enfoque.

Polonia sigue siendo una firme partidaria de la Corte Penal Internacional como parte del orden internacional basado en normas. Durante nuestro mandato como miembro del Consejo de Seguridad, que está a punto de concluir, nos hemos centrado en la promoción del derecho internacional. Una de las conclusiones del debate de alto nivel del Consejo de Seguridad sobre el fortalecimiento del derecho internacional (véase S/PV.8262), que se celebró a iniciativa de Polonia, fue que para un orden mundial basado en normas se requieren instituciones fuertes que hagan cumplir la ley, que es el propósito para el que se estableció la Corte Penal Internacional y la razón por la cual Polonia apoya las actividades de la Corte.

Eso no quiere decir que debamos dejar de señalar la necesidad de mejorar los métodos de trabajo y la eficiencia de la Corte. Por el contrario, consideramos que para que la Corte funcione debe haber una mayor racionalización. Por consiguiente, esperamos con interés recibir los resultados de los mecanismos de evaluación de la Corte y las mejoras propuestas, que se pusieron en marcha recientemente. Somos conscientes de que cubrir adecuadamente los puestos de magistrados y fiscales es fundamental para el éxito de la Corte Penal Internacional. Concedemos gran importancia al proceso de selección de un nuevo Fiscal, ya que su tarea de seleccionar y

preparar adecuadamente las causas es la piedra angular de las actuaciones de la Corte.

La Corte opera y siempre operará en un entorno internacional complejo y debe tomar decisiones difíciles, sopesando la necesidad de luchar contra la impunidad, por una parte, y la viabilidad de enjuiciar a los responsables de crímenes, por la otra. En este contexto, la gran responsabilidad del Fiscal de la Corte Penal Internacional pasa a un primer plano. Al mismo tiempo, debemos recordar que hacer realidad la promesa de justicia es un proceso en curso que requiere esfuerzos compartidos, tanto de la Corte —en particular la Fiscalía— como de los Estados partes.

Polonia desea subrayar que la propia Corte Penal Internacional carece de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de sus órdenes de detención. Por consiguiente, la Corte debe tratar constantemente de cultivar la confianza de los Estados, ya que su apoyo es indispensable para que la labor de la Corte sea eficaz. La confianza también aumenta la cooperación operacional y la financiación.

Polonia está dispuesta a cooperar con la Corte para realizar investigaciones y administrar justicia. Estamos convencidos de que, sin la cooperación de los Estados y las organizaciones internacionales, la Corte no tiene prácticamente ninguna posibilidad de ser plenamente eficaz. Esa cooperación debe basarse en el principio de complementariedad, que sigue siendo la base del sistema de justicia penal internacional. Cada uno de los Estados tiene la responsabilidad primordial de enjuiciar a los autores de los delitos más graves.

La complementariedad es un remedio parcial a la amplia jurisdicción territorial de la Corte. Los procedimientos nacionales eficaces establecieron un marco adecuado para la autoridad discrecional de la Fiscalía y la Corte y contribuyen a limitar los gastos operacionales.

Para concluir, permítaseme tomarme la libertad de reiterar mi esperanza de que por su diligente y sistemática labor y la calidad de su jurisprudencia, la Corte Penal Internacional convencerá a los que no están convencidos y tranquilizará a quienes ya están convencidos de que apoyar este singular órgano judicial internacional es un esfuerzo justo y valedero.

Sr. Špaček (Eslovaquia) (*habla en inglés*): Mi delegación se adhiere a la declaración formulada por el observador de la Unión Europea y, a la vez, quisiera formular algunas nuevas observaciones a título nacional.

Ante todo, deseo dar las gracias al Presidente, Sr. Chile Eboe-Osuji, por su amplia exposición informativa.

También doy las gracias a la Corte Penal Internacional por el informe sobre sus actividades en 2018 y 2019 (véase A/74/324).

El debate de la Asamblea General sobre el informe es uno de los importantes vínculos institucionales entre las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, y ofrece una plataforma para que los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas puedan examinar la labor de este singular órgano judicial.

En la Conferencia de Roma de 1998 creó el único órgano judicial internacional permanente que tiene jurisdicción respecto de los crímenes más graves en virtud del derecho internacional. La propia existencia de la Corte refleja la creciente convicción de la comunidad internacional de que la rendición de cuentas debe ser un componente integral de la solución de conflictos. Es difícil concebir cómo una sociedad desgarrada por los conflictos podría restablecer la paz sostenible y la normalidad sin cumplir los requisitos de la justicia y la humanidad. El hecho de que casi 14.000 víctimas participaron en las causas presentadas ante la Corte durante el período que se examina es una prueba sólida de un llamamiento en pro de la justicia en general y de la pertinencia de la Corte para situaciones específicas. Hay que hacer justicia a estas víctimas, no solo en forma de garantías procesales, sino también mediante las reparaciones y la asistencia para que puedan reanudar una vida normal.

La Corte puede cumplir su misión poniendo fin a la impunidad de los autores de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de agresión, solo si logra la universalidad. Debemos concentrar todos nuestros esfuerzos políticos en entablar un diálogo abierto y dialogar de manera sistemática, abierta y paciente sobre la base de los valores fundamentales compartidos de la Corte, que están concebidos para seguir fortaleciendo el orden internacional basado en normas y evitar la impunidad. Al mismo tiempo, deberá alentarse a los Estados participantes a sumarse al sistema del Estatuto de Roma, a fin de eliminar las lagunas jurisdiccionales territoriales o personales, que permite a los perpetradores evadir la justicia.

En cuanto a la cuestión de los vínculos entre las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, hay una simbiosis natural entre las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. La posibilidad de la remisión de causas de conformidad con el subpárrafo b) del Artículo 13 del Estatuto de Roma ha ampliado el espectro de medidas que el Consejo de Seguridad puede adoptar en relación con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Eslovaquia alienta al Consejo de Seguridad a que utilice este instrumento singular de hacer remisiones cuando se cometan tales atrocidades y en las que las autoridades nacionales que tienen la responsabilidad primordial de enjuiciar esos crímenes no estén en condiciones de hacerlo. Se están cometiendo crímenes internacionales y donde las autoridades nacionales tienen la responsabilidad primordial del enjuiciamiento de esos delitos, no están en condiciones de hacerlo. No obstante, a menos que el Consejo de Seguridad haga debido seguimiento de sus remisiones, en particular asegurando la cooperación de los Estados Miembros, este procedimiento no arrojará los resultados deseados, como se ha comprobado en la situación en Libia y la situación en Darfur, en el Sudán.

Por último, pero no por ello menos importante, deseo señalar que durante el período que abarca el informe, la Corte Penal Internacional ha emitido varias decisiones, en particular sobre la cuestión de la cooperación con la Corte. La jurisprudencia de la Corte Penal Internacional tiene grandes posibilidades de seguir desarrollándose y esclareciendo las cuestiones del derecho penal internacional, así como apoyar y orientar los esfuerzos nacionales en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, para que esas posibilidades se conviertan en una contribución efectiva, la Corte debe prestar especial atención a la necesidad de garantizar un razonamiento claro, detallado y bien fundado para emitir sus decisiones.

Para concluir, quisiera reiterar el firme apoyo de Eslovaquia a la Corte Penal Internacional, así como a la causa más amplia de subsanar el problema de la impunidad por los delitos previstos en el derecho internacional. Esta perspectiva también se refleja claramente en el servicio comprometido de Eslovaquia como Vicepresidente de la Asamblea de los Estados partes en el Estatuto de Roma y Coordinador del Grupo de Trabajo de Nueva York de la Mesa de la Asamblea.

Sr. García Moritán (Argentina): Quisiera, en primer lugar, agradecer al Magistrado Chile Eboe-Osuji por la presentación del informe sobre las actividades de la Corte Penal Internacional en el último año (véase A/74/324). Deseo agradecer también al Magistrado Eboe-Osuji por la presentación de los informes del Secretario General sobre la aplicación del artículo 3 del Acuerdo de Relación entre las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional y sobre gastos realizados y reembolsos recibidos en relación con la asistencia prestada a la Corte Penal Internacional (A/74/325 y A/74/326).

Asimismo, la Argentina espera que una vez más se apruebe por consenso la resolución de la Asamblea

General sobre el informe de la Corte Penal Internacional (A/74/L.8), en coincidencia con la presentación de dicho informe y del debate sobre este tema del programa.

La Corte, con su notable actividad desarrollada desde la exposición informativa (véase A/73/PV.28) sobre los informes del año pasado (véase A/73/334), vuelve a demostrar en los hechos que es una herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad, la promoción de los derechos humanos y la consolidación del estado de derecho en el plano internacional. La Argentina renueva su compromiso permanente con la Corte, mediante el activo involucramiento en los mecanismos previstos por la Asamblea de Estados Partes, y con el objetivo de alcanzar la universalidad del Estatuto.

El apoyo argentino se manifiesta de diversas maneras, pero en particular nos llena de orgullo haber sido el primer Estado parte en concluir los cuatro acuerdos de cooperación sugeridos por la Corte. Asimismo, la Argentina ha ratificado las enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión y, por lo tanto, celebra la activación de la competencia de la Corte sobre dicho crimen.

Nos complace el avance en el proceso de elección del próximo Fiscal de la Corte, en particular, la adopción de los términos de referencia y el trabajo realizado hasta el momento por el Comité de Selección y el Panel de Expertos. Para la Argentina, es crucial identificar candidatos con marcada experiencia y reconocida trayectoria, que continúen con la labor realizada por la actual Fiscal, siempre respetando el balance de género, el equilibrio geográfico y una representación adecuada de los principales sistemas legales del mundo, como principios rectores respecto del personal de la Corte.

También nos gratificamos por el positivo avance registrado en el proceso de revisión externo independiente, ya que será una gran oportunidad para realizar los ajustes necesarios al funcionamiento del sistema del Estatuto de Roma en su conjunto. El proceso, liderado por la Presidencia de la Asamblea de Estados Partes, solo tendrá la legitimidad necesaria para alcanzar el éxito si continúa con la transparencia e inclusividad que lo ha caracterizado hasta este momento.

Quisiera hacer una referencia a la relación de la Corte con las Naciones Unidas. La relación entre esta Organización y la Corte es crucial, siempre dentro del respeto a la independencia judicial de la Corte. En ese marco, reiteramos algunas de las preocupaciones que la Argentina mantiene acerca de las remisiones de situaciones realizadas por el Consejo de Seguridad, en especial el tema del costo financiero de dichas remisiones, el cual ha sido

hasta el momento sufragado exclusivamente por los Estados Partes de la Corte. Ello, a pesar de las normas claras contenidas en el Estatuto de Roma y el Acuerdo de Relación entre las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, según las cuales los costos de las remisiones tienen que ser sufragados por las Naciones Unidas.

La lucha contra la impunidad es un objetivo de los Estados Partes en el Estatuto de Roma y también de las Naciones Unidas, pero ese objetivo debe ir acompañado del compromiso de proveer a la Corte de los recursos necesarios para cumplir sus funciones. La falta de acción a este respecto puede poner en peligro la sostenibilidad de las investigaciones de la Corte y puede impactar en la credibilidad de la Organización. Asimismo, creemos que hay margen para un mayor y mejor relacionamiento entre la Corte y el Consejo de Seguridad, en especial la labor de sus órganos subsidiarios como los Comités de Sanciones o el Grupo de Trabajo sobre los Niños y los Conflictos Armados.

Para finalizar, la Argentina desea enfatizar la contribución a los objetivos de esta Organización por parte de la Corte Penal Internacional en su lucha contra la impunidad por los crímenes más graves de trascendencia internacional. En efecto, es innegable la contribución de dicho tribunal a la configuración de un sistema multilateral que tiene como objetivo fomentar el respeto por los derechos humanos y lograr una paz duradera, de conformidad con el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. El sufrimiento de las víctimas de los crímenes más atroces es la mayor vergüenza de la humanidad. No podemos permitir que este siglo no brinde respuestas contundentes ante dichas violaciones y nos permita construir entre todos un mundo más justo bajo la primacía del derecho internacional.

Sr. De la Fuente Ramírez (México): México agradece al Presidente de la Corte Penal Internacional, Magistrado Chile Eboe-Osuji, por la presentación del informe anual de la Corte Penal Internacional sobre sus actividades ante la Asamblea General (véase A/74/324). Reconocemos asimismo el liderazgo del Presidente y reiteramos que cuenta con el pleno apoyo de México.

Como Estado Parte del Estatuto desde 2006, México participa activamente en la Asamblea de los Estados Partes, a través de su membresía en la Mesa y de su presidencia del Grupo de Trabajo sobre las Enmiendas. Además, mi país copatrocina la resolución que hoy aprobamos (A/74/L.8), es miembro del Grupo de Amigos de la Corte Penal Internacional en las Naciones Unidas, y en la Organización de los Estados Americanos, México es

el autor de la resolución que la Asamblea General de ese organismo presenta y aprueba bienalmente para promover que los Estados de la región americana ratifiquen el Estatuto de Roma, implementen sus disposiciones a nivel nacional y cooperen con la Corte Penal Internacional.

Los esfuerzos no se limitan al apoyo y fortalecimiento de la propia Corte, sino que pasan, además, por la difusión de los contenidos del Estatuto y de los desarrollos en materia de justicia penal internacional a partir del propio Estatuto. En este marco, y como parte de la constante actualización de funcionarios públicos, el Curso anual de derecho internacional humanitario celebrado en México contó este año con un segmento relativo a la Corte Penal Internacional.

Mi delegación toma nota de los importantes avances judiciales de la Corte en el último año. Este ha sido un año de retos nuevos para el tribunal y para los Estados, tanto en los temas institucionales como en los de la práctica y en la relación entre la Corte con los Estados Partes y con los Estados que no son Partes en el Estatuto. En el plano institucional, México da la bienvenida a la iniciativa encaminada a hacer un estudio sobre la labor de la Corte Penal Internacional, solicitado por la propia Corte. Este análisis servirá para fortalecerla en todos sus aspectos. Reiteramos el compromiso de México de continuar trabajando en forma permanente con este propósito.

Destaca, en particular, la responsabilidad que tendremos los Estados Partes en la elección del próximo Fiscal y en ajustar, a través de la Asamblea de los Estados Partes, todos aquellos aspectos que colectivamente acordemos como necesarios para que la Corte continúe cumpliendo con su mandato de manera eficaz. Apoyamos también la iniciativa suiza de enmendar el Estatuto de Roma a fin de homologar el crimen de hambruna tanto en conflictos armados internacionales como en los no internacionales. Nos complace ver la evolución que ha tenido este tema en el Grupo de Trabajo sobre las Enmiendas y esperamos que este pueda decidir pronto su envío a la Asamblea de los Estados Partes para su aprobación en diciembre próximo.

En cuanto a los temas de la práctica judicial de la Corte, este año resolvió asuntos relevantes de cooperación entre los Estados y la Corte, y de su compatibilidad con otras normas internacionales. También abordó otros temas complicados como la interpretación de las obligaciones sustantivas derivadas del Estatuto y el alcance de la jurisdicción de la Corte en situaciones que involucran tanto a Estados Partes como a Estados no Partes. Asimismo,

notamos con satisfacción la pronta ejecución de las órdenes de detención emitidas por la Corte en este período.

También vemos con satisfacción la inclusión en el informe de propuestas específicas y acciones concretas para fortalecer el sistema de justicia penal internacional. En particular, valoramos en forma positiva la interacción de la Corte con otros órganos del sistema de las Naciones Unidas y la celebración de acuerdos y compromisos que permitan la colaboración con otras instancias. Las Naciones Unidas cuentan con la estructura y con organismos que permiten a los Estados fortalecer sus capacidades en temas relacionados con la Corte, como el estado de derecho, los derechos humanos y la protección del patrimonio cultural, por citar algunos ejemplos. Este tipo de acuerdos evita la duplicidad de funciones y potencia la capacidad de cada institución para cumplir con el mandato encomendado.

Concluyo reiterando el compromiso de México con la justicia penal internacional y con el fortalecimiento del sistema creado por el Estatuto de Roma para evitar la impunidad de los autores de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su conjunto. En congruencia con esto, esperamos que en los próximos meses México ratifique las enmiendas al Artículo 8, párrafo 2, del Estatuto de Roma, aprobadas en Kampala en 2010 y en Nueva York en 2017.

Sr. Fox-Drummond Gough (Brasil) (*habla en inglés*): El establecimiento de la Corte Penal Internacional hace más de 20 años representó una síntesis del impacto que los valores y las ideas pueden tener en el mundo real. Basándose en los conceptos de la dignidad humana, la lucha contra la impunidad y la justicia internacional, países de todas las regiones han trabajado de consuno para construir una institución concebida para investigar y castigar los crímenes internacionales más graves. Como ocurre con cualquier actividad humana, la Corte Penal Internacional ha demostrado tanto logros como deficiencias. Debemos celebrar las victorias, tales como la concesión de reparaciones a las víctimas y el éxito de las actividades de divulgación de la Corte, y al mismo tiempo reflexionar sobre cómo podemos hacer frente a los desafíos actuales.

Al Brasil le enorgullece ser uno de los fundadores de la Corte Penal Internacional y por ello le complace que la Corte se haya consolidado como primer tribunal permanente concebido para luchar contra la impunidad por los delitos internacionales más graves. Al velar por que las personas enjuiciadas sean juzgadas con equidad y pleno respeto de sus derechos, la Corte constituye un importante instrumento para lograr la justicia y la paz.

En el informe anual de la Corte (véase A/74/324) se señala claramente su gran volumen de trabajo durante el período que se examina. Desde su creación hace 20 años, la Corte ha abierto 27 causas, en las que están implicados 45 sospechosos o acusados, y ha investigado 11 situaciones. El Brasil celebra que las dos nuevas órdenes de detención se aplicasen con prontitud y que los sospechosos fueran puestos a disposición de la Corte. Es un ejemplo positivo de la aplicación satisfactoria de las normas del Estatuto de Roma en materia de cooperación.

Otro acontecimiento alentador es la labor del Fondo Fiduciario para las Víctimas, cuyo mandato en materia de reparaciones es fundamental para promover los derechos de las víctimas a la justicia. Con el propósito de conciliar la justicia retributiva y la justicia reparadora, el Estatuto de Roma contiene un sofisticado conjunto de disposiciones sobre los derechos de las víctimas que les permite participar en los procedimientos y solicitar reparaciones. Es alentador ver los informes sobre los proyectos en curso y la colaboración del Fondo Fiduciario con las víctimas, sus familiares y las comunidades afectadas. También encomiamos la dimensión positiva de la cooperación reflejada en el fortalecimiento de las capacidades nacionales.

Todos los Estados Partes tienen la responsabilidad de seguir trabajando para mejorar el sistema del Estatuto de Roma, abordando los desafíos y brindando su apoyo cuando sea necesario. El primer desafío importante atañe a la universalidad. Me complace recordar no solo que todos los países de Sudamérica son partes en el Estatuto de Roma, sino también que los Estados de América Latina y el Caribe representan el segundo grupo regional más amplio entre los Estados Partes, siendo el primero el Grupo de los Estados de África.

El segundo desafío se refiere a la relación entre la Corte y las Naciones Unidas. En este sentido, el Brasil reitera su preocupación de larga data respecto a la financiación de las remisiones del Consejo de Seguridad. Se trata de una cuestión de carácter estructural con una gran repercusión en la capacidad de la Corte para cumplir su mandato. Una vez más, reiteramos nuestro llamamiento para que se apliquen el artículo 13 del Acuerdo de Relación y el apartado b) del artículo 115 del Estatuto de Roma, en los que se ofrece una orientación clara en el sentido de que esos gastos se deben sufragar, al menos en parte, con fondos proporcionados por las Naciones Unidas, y no solamente con fondos aportados por las partes en el Estatuto de Roma. Es igualmente importante destacar que, como se estipula en el Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General tiene la

responsabilidad exclusiva de examinar y aprobar el presupuesto de la Organización. La financiación apropiada de las causas remitidas por el Consejo de Seguridad aumentaría la credibilidad de la Corte y de las Naciones Unidas. La situación actual no es justa ni sostenible.

El tercer desafío ocupa un lugar central en los debates que se están celebrando en la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma y sus órganos subsidiarios. Los llamamientos en favor de un examen del sistema del Estatuto de Roma procedían de una gran variedad de agentes. Nosotros, como Estados Partes, debemos intensificar nuestros esfuerzos y trabajar de consuno para fortalecer la Corte Penal Internacional. Para el Brasil, es imprescindible que todo proceso de examen preserve la independencia fiscal y judicial de la Corte, que constituyen la piedra angular de cualquier institución judicial legítima. El Brasil está siguiendo de cerca los debates, tanto en La Haya como en Nueva York, y espera con interés entablar un diálogo fructífero en la Asamblea de los Estados Partes que se celebrará en diciembre y hacer contribuciones positivas a las decisiones que se tomen en ese momento. Consideramos que los Estados Partes deberían participar plenamente en cualquier proceso de examen, ya que ello confiere la legitimidad y la transparencia que exige el ejercicio. La Asamblea de los Estados Partes adoptará todas las decisiones importantes sobre el examen, en particular las que tienen repercusiones presupuestarias.

La búsqueda de la paz y la justicia es siempre difícil, y ese desafío es inherente a la búsqueda de un orden mundial más justo y cooperativo. La paz y la justicia se complementan mutuamente. Forman parte de los valores comunes que han hecho posible que la primera corte penal internacional permanente basada en un tratado se convirtiera en realidad. El Brasil sigue firme en su compromiso con el sistema del Estatuto de Roma y los valores que motivaron su creación.

Sr. Kawamura (Japón) (*habla en inglés*): Para comenzar, quisiera expresar mi agradecimiento al Presidente Chile Eboe-Osuji por su dedicación y liderazgo, así como por su exposición informativa sobre el informe exhaustivo relativo a la labor de la Corte Penal Internacional (véase A/74/324).

El Japón está comprometido a luchar contra la impunidad y concede una gran importancia a la promoción del estado de derecho. Por lo tanto, el Japón siempre ha apoyado a la Corte desde sus inicios. La política de larga data de mi Gobierno es ayudar a la Corte para que pueda funcionar de manera eficaz y sostenible, con el apoyo de la

comunidad internacional. Además de ser el país que aporta la mayor contribución financiera a la Corte, también apoyamos a la Corte en nuestra calidad de miembro de la Mesa y con la aportación de recursos humanos calificados.

Este año se cumple el 70º aniversario de los Convenios de Ginebra, que constituyeron un gran paso hacia un mundo más humano. Sin embargo, en la actualidad, seguimos siendo testigos de la crueldad a gran escala en los conflictos. Creemos que la rendición de cuentas es la clave para un mundo mejor. En ese sentido, consideramos que la Corte es un ambicioso intento de impartir justicia y garantizar que nadie se quede atrás.

Toda institución pasa por sus altibajos. La Corte Penal Internacional no es una excepción. Diecisiete años después de su fundación, es hora de que los Estados Partes reafirmemos nuestras responsabilidades como partes interesadas. La reforma de la Corte es muy importante para que cumpla su mandato básico. Los Estados Partes deben seguir participando en debates constructivos sobre cómo podemos fortalecer la Corte. Los Estados Partes están a cargo de la reforma, y el futuro de la Corte está en nuestras manos. El Japón se compromete a colaborar activamente en la reforma y el fortalecimiento de la Corte.

Permítaseme destacar tres aspectos importantes relacionadas con el fortalecimiento de la Corte, a saber, la universalidad, la estabilidad y la complementariedad. En cuanto al primero de estos aspectos, quisiera señalar que somos más fuertes juntos. Para garantizar que la Corte Penal Internacional promueva eficazmente el estado de derecho en todo el mundo, más países deben sumarse a la Corte. A largo plazo, la Corte debe convertirse en una corte penal verdaderamente universal. Exhortamos a los Estados que aún no sean partes en el Estatuto de Roma a que se adhieran a este. Como Estados Partes, tenemos que seguir colaborando con los Estados que no son partes e insistiendo en el valor insustituible del sistema del Estatuto de Roma en la lucha contra la impunidad.

En ese contexto, quisiéramos hacer hincapié en que es necesario aplicar un enfoque gradual para apelar a la comprensión y la cooperación de un mayor número de Estados. La Corte Penal Internacional es todavía una organización relativamente joven; buscar logros precipitadamente pondría en peligro nuestros esfuerzos encaminados a luchar contra la impunidad. El Japón considera que lo más importante es que la Corte Penal Internacional prosiga sus esfuerzos y logre avances de manera constante.

En cuanto al último aspecto, la complementariedad, el papel de la Corte Penal Internacional es complementar las jurisdicciones penales nacionales. La existencia de la Corte no resta importancia a las jurisdicciones nacionales en el enjuiciamiento de los delitos graves. La incorporación de este principio en las actividades de la Corte también contribuirá a mejorar la universalidad de ese órgano. El Japón considera que si presta atención a la viabilidad de las investigaciones y al principio de complementariedad, y establece las prioridades adecuadamente, la Fiscalía puede utilizar sus recursos y cumplir su mandato básico de la manera más eficaz posible.

Para concluir, esperamos que la Corte Penal Internacional siga trabajando diligentemente en la lucha contra la impunidad al tiempo que consolida su credibilidad. El Japón seguirá apoyando con firmeza la labor de la Corte Penal Internacional.

Sr. Scott-Kemmis (Australia) (*habla en inglés*): La Corte Penal Internacional es un elemento clave del sistema del Estatuto de Roma, un sistema concebido para garantizar que los responsables de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional respondan ante la justicia. La rendición de cuentas por los crímenes atroces sigue siendo fundamental para mantener la paz y apoyar la reconciliación en las situaciones posteriores a los conflictos. La responsabilidad primordial de investigar y, cuando procede, enjuiciar a los responsables de crímenes atroces masivos corresponde, con toda razón, a los Estados. No obstante, la Corte Penal Internacional tiene un papel esencial que desempeñar como tribunal de última instancia allí donde los Estados, que de otra manera tendrían jurisdicción, no pueden o no quieren ejercerla. Por supuesto, Esa complementariedad es esencial para el éxito de la Corte.

Acogemos con beneplácito los principales logros de la Corte este año. En particular, nos viene a la mente la condena de Bosco Ntaganda por 18 cargos de crímenes de lesa humanidad, sobre todo esclavitud sexual y crímenes de guerra, incluida la utilización de niños soldados. También estamos pensando en la rápida puesta bajo custodia de dos acusados tras la emisión de las órdenes de detención. Por otra parte, acogemos con beneplácito el proceso de reforma que se viene llevando a cabo para hacer realidad la institución sólida y eficaz prevista en el Estatuto de Roma, y fortalecer la capacidad de la Corte para cumplir su mandato básico. La elección de un nuevo Fiscal y de nuevos magistrados el próximo año también será crucial. Es esencial que se preste atención especial al cumplimiento del mandato básico de la Corte mediante la realización de procesos

judiciales justos y rápidos, y que la Fiscalía se concentre en garantizar que ante la Corte se presenten causas bien preparadas y bien fundadas en evidencias.

La Corte Penal Internacional no puede cumplir por sí sola el importante mandato que le hemos conferido. Pedimos al sistema de las Naciones Unidas que garantice que la Corte reciba un apoyo pleno y constante. No debemos descuidar el papel fundamental que desempeña una acción judicial coherente e imparcial en la respuesta de la comunidad internacional al trauma causado por los conflictos.

En su esencia, la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas se esfuerzan por alcanzar los mismos objetivos. Uno de los propósitos primordiales de la Carta de las Naciones Unidas, a saber, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, se ajusta al Estatuto de Roma. Hemos escuchado las reiteradas solicitudes de la Fiscal al Consejo de Seguridad para que dé seguimiento y apoyo efectivos a las situaciones remitidas a la Corte por ese órgano. El apoyo político del Consejo a la labor de la Corte en las situaciones que le ha remitido es fundamental, en particular en lo que respecta a la cooperación. La interrelación entre los mandatos de las Naciones Unidas y la Corte hace de ésta un asociado clave para la Organización. Como tal, es fundamental que las Naciones Unidas presten a la Corte el apoyo que necesita para cumplir con su mandato. En ese sentido, acogemos con beneplácito los esfuerzos que hasta la fecha han venido realizando las Naciones Unidas, y exhortamos al Secretario General a que siga mejorando la cooperación de conformidad con el Acuerdo de Relación.

Sr. Leal Matta (Guatemala): Permítaseme agradecer al Presidente de la Corte Penal Internacional, Magistrado Chile Eboe-Osuji, por la presentación de su informe contenido en el documento A/74/324, el cual nos actualiza sobre las actividades que la Corte realizó durante el período comprendido del 1 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019.

Desde el inicio de las operaciones de la Corte, se han iniciado 27 causas, en relación con 45 sospechosos o acusados y se han realizado investigaciones en 11 situaciones, lo cual demuestra la gran actividad que atañe a la Corte, pero al mismo tiempo hace un llamado a la reflexión, ya que la naturaleza jurisdiccional de la Corte Penal Internacional es traer ante la justicia a aquellos perpetradores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, lo cual redundará en avances en la protección de las víctimas, incluidas las víctimas de violencia sexual en conflictos, y en el combate del

reclutamiento de niños en conflictos armados. Dos decenios después de la adopción del Estatuto, es meritorio evaluar la transcendencia de los esfuerzos de la comunidad internacional para prevenir nuevos casos que recaerían en la jurisdicción de la Corte.

Por otra parte, apreciamos y tomamos nota de la información presentada sobre las actuaciones de la Corte y sus respectivas Salas de Cuestiones Preliminares, Primera Instancia y Apelación; de la Fiscalía; y del Fondo Voluntario para las Víctimas. Mi país considera que las actuaciones de la Corte coadyuvan al fortalecimiento de la justicia y al estado de derecho en los Estados partes. Por tal razón, reafirmamos nuestro inequívoco respaldo a la Corte Penal Internacional y nuestro compromiso con la lucha contra la impunidad y por la prevención de atrocidades. Mi delegación valora la relación de apoyo y cooperación que existe entre las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, no solo porque fortalece el diálogo y la relación entre ambas entidades, sino porque también sirve para dar visibilidad al trascendental trabajo de la Corte, y esto representa una oportunidad para afianzar su autoridad y conocer más sobre su mandato y sobre la primordial importancia de la cooperación de los Estados.

Aunado a lo anterior, Guatemala renueva su respeto al principio de complementariedad y al fortalecimiento de los sistemas nacionales para garantizar la rendición de cuentas. La función jurisdiccional de la nación tiene primacía para investigar o enjuiciar a los responsables de los delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional, y la complementariedad de la Corte es valorada en su defecto, siempre respetando la soberanía de cada país.

Asimismo, creemos que la cooperación entre organismos internacionales es de ayuda significativa. Por eso, consideramos que se hace necesario mejorar la cooperación entre la Corte y el Consejo de Seguridad, a fin de unir esfuerzos y contribuir a la prevención de crímenes que atentan contra la paz y la seguridad internacionales, conciliar esfuerzos para combatir la impunidad de esos actos, y mantener intercambios periódicos.

La cooperación es uno de los pilares fundamentales en los que descansa el buen funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Por ende, el firme compromiso de los Estados partes es crucial para acrecentar la capacidad de la Corte, a fin de asegurar la rendición de cuentas, hacer justicia y brindar resarcimiento a las víctimas, así como ayudar a prevenir futuros delitos, según lo previsto en el espíritu del Estatuto de Roma. Este énfasis se debe

a la importancia que la Corte tiene para la justicia penal internacional en lo que respecta a garantizar el estado de derecho y la paz y seguridad internacionales.

La lucha contra la impunidad es un objetivo de los Estados Partes en el Estatuto de Roma y también de las Naciones Unidas, pero ese objetivo debe ir acompañado del compromiso de proveer a la Corte de los recursos necesarios para cumplir sus funciones. La falta de esos recursos puede poner en peligro la sostenibilidad de las investigaciones de la Corte. La cooperación, asistencia y el apoyo de las Naciones Unidas, los Estados parte y de otros Estados a la Corte continúan siendo indispensables para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de su mandato.

El Sr. García Moritán (Argentina), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

Al mismo tiempo, mi delegación hace un llamado a redoblar esfuerzos para lograr un régimen universal. Cada paso hacia la universalidad reducirá significativamente el riesgo de impunidad y contribuirá a la consolidación de la paz y la estabilidad de los Estados. Por esta razón, se debe continuar promoviendo la dimensión universal del Estatuto de Roma manteniendo el impulso al proceso de ratificaciones y adhesiones. Mientras más países se sumen a los 122 Estados parte, se estará fortaleciendo el régimen de protección de los derechos humanos a nivel internacional por violaciones realizadas por actores estatales como no estatales.

Por último, encomiamos la participación a alto nivel de la Corte Penal Internacional en actividades sobre temas de género y en destacar su relación con el Objetivo de Desarrollo sostenible 16 para promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Quisiéramos asegurar a la Asamblea que puede contar con nuestra delegación para el apoyo firme y constante a la Corte Penal Internacional a fin de que pueda cumplir con su mandato.

Sra. Bavdaž Kuret (Eslovenia) (*habla en inglés*): Eslovenia hace suya la declaración formulada anteriormente por el observador de la Unión Europea.

Habida cuenta de la importancia del tema que nos ocupa, quisiéramos formular algunas observaciones adicionales. Permítaseme comenzar dando las gracias a la Corte Penal Internacional por su informe anual (véase A/74/324) presentado ante las Naciones Unidas, y al Presidente de la Corte Penal Internacional, Magistrado

Chile Eboe-Osuji, por su exhaustiva presentación de las principales cuestiones.

La política exterior de Eslovenia sigue centrada en promover firmemente el estado de derecho. Consideramos que la Corte Penal Internacional, como tribunal de justicia, desempeña un papel fundamental en el establecimiento de ese principio al garantizar que los delitos más graves no queden impunes, y que es esencial aumentar el apoyo a la justicia penal internacional y a la Corte, sobre todo teniendo en cuenta que la Corte afronta algunos desafíos y resistencia en sus esfuerzos por enjuiciar las atrocidades más graves y prevenir esas violaciones en el futuro. A la luz de la constante cooperación de Eslovenia con la Corte Penal Internacional, agradecemos al Presidente de la Corte su visita a Eslovenia el mes pasado. Durante su visita a Liubliana, pudimos entablar conversaciones sustantivas sobre los desafíos, las operaciones y la función de la Corte y otras cuestiones de actualidad relacionadas con la justicia penal internacional.

En vista de que las críticas al multilateralismo van en aumento y que las presiones recurrentes están socavando el orden internacional basado en normas, es fundamental establecer una mayor cooperación entre sus principales defensores. El Consejo de Seguridad y la Corte Penal Internacional deben redoblar sus esfuerzos por establecer una relación eficaz que permita a la Corte cumplir con su mandato de cerrar la brecha de la impunidad y enjuiciar a los principales responsables, y el Consejo debe cumplir su mandato de mantener la paz y la seguridad internacionales. La alianza entre las dos instituciones aumenta su propia credibilidad y la del sistema del Estatuto de Roma.

Es igualmente importante garantizar la plena y rápida cooperación de los Estados. Los Estados deben ser conscientes de sus obligaciones jurídicas, tal como se definen en el Estatuto de Roma. Toda falta de apoyo deja inevitablemente a la Corte sin posibilidad de funcionar con eficacia, sobre todo cuando se trata de ejecutar órdenes de detención pendientes. Debemos comprender que la ratificación universal del Estatuto de Roma es crucial para la disuasión efectiva de los delitos más graves. En ese sentido, lamentamos la retirada de Filipinas de la Corte y la decisión de Malasia de retirar su instrumento de adhesión al Estatuto de Roma. Celebremos los esfuerzos que realiza la Corte por cooperar con los asociados regionales e internacionales en su empeño por lograr la universalidad del Estatuto, una mayor cooperación entre los Estados y la aprobación de leyes de aplicación nacional. Eslovenia reitera su compromiso de promover los principios del Estatuto de Roma y

su universalidad y aplicación del enjuiciamiento de los crímenes de agresión. En cuanto a la integridad del Estatuto de Roma y a los esfuerzos encaminados a hacerlo más coherente, a veces se necesitan cambios para mejorar. Este año, hemos ratificado la supresión del artículo 124 del Estatuto de Roma. Como ya se ha señalado, la inanición en el caso de un conflicto armado que no sea de carácter internacional debería figurar como crimen de guerra en el artículo 8.

En la lucha contra la impunidad, es fundamental contar con una Corte Penal Internacional fuerte, pero también es importante que los tribunales nacionales desempeñen el papel que les corresponde y dispongan de los instrumentos necesarios a la hora de enjuiciar los delitos de carácter internacional. En ese sentido, la iniciativa sobre asistencia judicial recíproca, que Eslovenia dirige junto con la Argentina, Bélgica, Mongolia, los Países Bajos y el Senegal, propone una convención internacional sobre asistencia judicial recíproca y la extradición para el enjuiciamiento interno de los delitos internacionales más graves, lo cual fortalecería la capacidad de los tribunales nacionales. Hasta la fecha, 69 Estados han expresado su apoyo a la iniciativa. El grupo principal de Estados que dirige la iniciativa seguirá esforzándose por celebrar negociaciones sobre una convención de asistencia judicial recíproca, que está prevista que se celebre en Eslovenia, en junio de 2020. Quisiéramos invitar a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que se sumen a la iniciativa de asistencia judicial recíproca.

Celebramos el hecho de que el mandato del Fondo Fiduciario para las Víctimas respecto de las reparaciones está empezando a desempeñar un papel más importante en la labor del Fondo. La justicia reparadora para las víctimas de crímenes internacionales, sus familias y comunidades es esencial. También valoramos los esfuerzos del Fondo por haber abordado las cuestiones de salud mental y haber brindado apoyo psicológico a las víctimas supervivientes de conflictos. Eslovenia se complace en seguir contribuyendo al Fondo Fiduciario para las Víctimas.

En aras de la credibilidad y la integridad de la Corte, es fundamental resolver los desafíos actuales. Consideramos que todas las deliberaciones sobre las diversas posibles dimensiones de los procesos de reforma deberían basarse en la apertura a la cooperación constructiva y lograr que se entable el diálogo entre la Corte, sus Estados Partes y la sociedad civil. Toda medida de reforma debería tener por objeto formular recomendaciones concretas y viables sobre la manera de mejorar

el desempeño y la eficacia de la Corte. La publicación sincronizada de los tres planes —el plan estratégico general de la Corte correspondiente al período de 2019 a 2021 y los planes estratégicos específicos de la Fiscalía y la Secretaría— es sin duda una de esas medidas. No obstante, se debe prestar más atención al hecho de que muchas cuestiones pueden y deben ser abordadas por los propios Estados partes. Su labor y su función en la Asamblea de los Estados Partes y los grupos de trabajo existentes debería ser fundamental para mejorar la eficacia de la Corte, pero teniendo en cuenta las características propias de cada autoridad.

Consideramos que diversas iniciativas simultáneas para encontrar soluciones eficaces a los desafíos que enfrenta la Corte reflejan su importancia y su función en la comunidad internacional en general. Estamos absolutamente convencidos de que, con los esfuerzos conjuntos y el apoyo inquebrantable de todos los agentes principales del sistema del Estatuto de Roma, se podrán superar con éxito los impedimentos al funcionamiento efectivo de la Corte.

Sr. Nfati (Libia) (*habla en árabe*): Ante todo, deseo expresar mi agradecimiento al Presidente de la Corte Penal Internacional, Magistrado Chile Eboe-Osuji, y darle las gracias por haber presentado su informe anual (véase A/74/324), del que hemos tomado nota.

Con frecuencia se plantea dónde se debería impartir justicia respecto de los crímenes más graves. ¿Debería ser en nuestros sistemas judiciales nacionales o en la Corte Penal Internacional, en La Haya? Con el objetivo de luchar contra la impunidad, el Estatuto de Roma ha creado un enfoque moderno que vincula los sistemas nacionales e internacionales para abordar los crímenes más graves, a saber, los crímenes de lesa humanidad, de guerra y de genocidio. Como resultado, ha surgido el concepto de la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional a fin de crear un marco para la relación entre el sistema internacional de justicia penal y los sistemas nacionales, que se han beneficiado de esta complementariedad. Por este motivo, Libia ha cooperado con la Corte Penal Internacional en esta etapa de su lucha por alcanzar la justicia, destacando al mismo tiempo el principio de la soberanía del Estado libio en la aplicación de la legislación nacional a los crímenes cometidos en nuestro país. Si bien somos plenamente conscientes de los retrasos que se han producido en el enjuiciamiento de los sospechosos, afirmamos que eso no significa que el sistema nacional de Libia no quiera juzgar y castigar a los responsables de crímenes. Los retrasos son el resultado de cuestiones de seguridad

nacional que mi país está abordando. En ese sentido, hemos constatado que nuestro sistema judicial nacional ya ha comenzado a enjuiciar a muchos sospechosos, y mediante los fallos que se han dictado se ha castigado a algunos y se ha absuelto a otros. Por lo tanto, debe respetarse nuestra jurisdicción nacional.

Insistimos en que nuestro sistema judicial es capaz de estar a la altura de las circunstancias y defender la justicia. Para mejorar el estado de derecho en Libia necesitamos esfuerzos serios de la comunidad intencional para ayudar a nuestro Gobierno de Consenso Nacional a superar la actual crisis de seguridad. Eso debe ir de la mano de la labor encaminada a garantizar que nuestros procesos políticos lleguen a buen término. Esto puede lograrse prestando el apoyo necesario a las entidades encargadas de hacer cumplir la ley para que puedan contribuir a afianzar la paz y la estabilidad, a controlar las causas del conflicto y las nuevas situaciones que dan lugar a violaciones y crímenes, a confiscar los medios para la comisión de esos crímenes, especialmente las armas, y a detener a los grupos armados e ilegales.

Para concluir, quisiéramos reiterar que las autoridades libias están decididas a hacer que los responsables de los crímenes rindan cuentas y a combatir la impunidad, de conformidad con el principio de la territorialidad de la ley que refleja el estado de derecho. El sistema judicial libio es independiente, transparente y capaz de impartir justicia social y penal una vez que se hayan establecido las instituciones del Estado, y así lo hará.

Sra. Rush (Nueva Zelanda) (*habla en inglés*): Damos las gracias al Presidente Chile Eboe-Osuji por su informe (véase A/74/324) y su servicio continuo a la Corte Penal Internacional. Encomiamos los recientes logros de la Corte, que figuran en el informe del Presidente, y su relación constante con las Naciones Unidas. Tomamos nota con reconocimiento de la colaboración de la Corte con los Estados, las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales y regionales y la sociedad civil a fin de mejorar la cooperación con la Corte, la sensibilización sobre su labor y el apoyo que se le presta.

Nueva Zelanda apoya firmemente a la Corte y su mandato para hacer rendir cuentas a los responsables de los crímenes internacionales más graves. Como la única corte penal internacional permanente, desempeña un papel crucial en el sistema más amplio de los mecanismos de rendición de cuentas internacionales, y acogemos con agrado su valiosa contribución a este sistema

hasta la fecha. La Corte y su Estatuto han establecido gradualmente un nuevo paradigma respecto de la justicia penal internacional, que ha convertido la rendición de cuentas por crímenes atroces en un aspecto esencial del estado de derecho. Como tal, la Corte es uno de los numerosos órganos que garantizan la rendición de cuentas por los crímenes internacionales más graves.

Sin embargo, los Estados tienen la responsabilidad primordial de adoptar medidas firmes y adecuadas cuando se cometen crímenes internacionales. La Corte es un tribunal de último recurso para enjuiciar ese tipo de crímenes. Los tribunales y los procesos judiciales nacionales que garantizan la rendición de cuentas de los responsables de crímenes internacionales son fundamentales para cumplir el principio de complementariedad. A fin de cumplir con esa responsabilidad, los Estados partes son partidarios de que la Corte se centre en la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes internacionales más graves, de conformidad con el principio de complementariedad.

El pasado año conmemoramos el 20º aniversario de su Estatuto fundacional, y ahora empezamos el próximo capítulo de su existencia. Si bien reconocemos sus numerosos éxitos y logros, persisten algunos desafíos. Nueva Zelanda acoge con agrado el hecho de que la Corte y los Estados partes estudien juntos las perspectivas de reforma con el objetivo de fortalecer la Corte y mejorar el desempeño eficaz de su mandato. Cualquier posible reforma debería permitir y dar capacidad a la Corte para llevar a cabo la rendición de cuentas y la supervisión adecuada de la mejor forma posible.

La Corte ha aportado importantes contribuciones a la justicia penal y la jurisprudencia internacionales a través de la calidad y el carácter de sus funciones y decisiones judiciales. Esa es la función básica de la Corte, e instamos a todos los Estados partes a que la fortalezcan y la defiendan, entre otras cosas mediante la aplicación de medidas prácticas para garantizar que sus magistrados estén en las mejores condiciones posibles de desempeñar su función. Nueva Zelanda espera con interés participar de manera constructiva con otros Estados partes y con la sociedad civil en esta y otras cuestiones relativas a la reforma en el período previo a la próxima Asamblea de los Estados Partes.

En vista de los progresos constantes de la Corte y de los Estados partes para garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los crímenes más graves, Nueva Zelanda se compromete a mantener un diálogo abierto, franco, respetuoso y centrado en los objetivos

comunes de la comunidad internacional. El logro de ese objetivo debe incluir la cooperación en los planos nacional, regional e internacional. La independencia y la imparcialidad de la Corte son fundamentales para su mandato y su credibilidad. Por ello, Nueva Zelanda insta a todos los Estados a que respeten esos principios y se guíen por ellos en sus relaciones con la Corte. Ante todo, estamos comprometidos con la Corte y trabajaremos con otros para garantizar que la Corte siga siendo, y se considere, una institución judicial eficaz y sostenible.

Sr. Bondiuk (Ucrania) (*habla en inglés*): Ucrania hace suya la declaración formulada por el observador de la Unión Europea. Quisiera añadir algunas observaciones a título nacional.

Para comenzar, quisiera dar las gracias al Presidente de la Corte Penal Internacional por su exhaustiva presentación de las actividades anuales de la Corte.

Acogemos con satisfacción las medidas adoptadas por la Corte para mejorar su labor y optimizar el uso de sus recursos, así como su aprobación de un plan estratégico para toda la Corte para el período comprendido entre 2019 y 2021. Observamos con reconocimiento que, tras activarse la competencia de la Corte sobre el crimen de agresión el año pasado, varios Estados partes ya han ratificado o aceptado la enmienda sobre ese crimen. La eficacia de todas las actividades de la Corte, desde las investigaciones en curso hasta las actividades judiciales, depende de la cooperación de los Estados. Cooperar contribuye de manera importante a la prevención de los delitos más graves y a la lucha contra la impunidad de quienes los cometen.

Como uno de los primeros Estados en apoyar la idea de constituir un tribunal internacional permanente basado en un tratado, Ucrania participó de forma activa en la Comisión Preparatoria para la Creación de la Corte Penal Internacional y firmó el Estatuto de Roma en 2000. Posteriormente, Ucrania fue también uno de los primeros Estados no parte en ratificar el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional. Al confiar plenamente en este tribunal de última instancia, el 17 de abril de 2014, el Gobierno de Ucrania presentó una declaración de conformidad con el párrafo 3 del artículo 12 del Estatuto de Roma, en la que aceptaba la competencia de la Corte Penal Internacional sobre los delitos cometidos en su territorio entre el 21 de noviembre de 2013 y el 22 de febrero de 2014. Además, el 8 de septiembre de 2015, el Gobierno de Ucrania presentó una segunda declaración en virtud del mismo artículo del Estatuto, en la que aceptaba

el ejercicio de la competencia de la Corte Penal Internacional sobre los delitos cometidos en su territorio a partir del 20 de febrero de 2014, cuando comenzó la agresión militar rusa contra Ucrania. Debo reiterar que esas declaraciones tienen una duración indefinida. Por lo tanto, la Corte podrá ejercer su competencia sobre esos delitos con independencia de la nacionalidad de sus autores, incluso si son ciudadanos de terceros Estados.

Valoramos el hecho de que, durante el período que abarca el informe, la Fiscalía centrara su análisis en los delitos cometidos en Crimea y en el este de Ucrania, con el fin de identificar posibles casos para su investigación. El Gobierno de Ucrania y las organizaciones no gubernamentales ucranianas y extranjeras siguen presentando más información a la Corte y cooperando con la Fiscalía con respecto al examen preliminar, tanto mediante consultas en la Corte como durante sus misiones a Ucrania, la última de las cuales tuvo lugar en junio. En particular, los organismos ucranianos encargados de hacer cumplir la ley, en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, han seguido documentando y proporcionando a la Corte información, datos y pruebas adicionales relacionados tanto con la naturaleza del conflicto armado actual en Ucrania, un conflicto armado internacional causado por una agresión armada extranjera, como con los numerosos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas armadas del Estado agresor y sus autoridades de ocupación, su personal y sus representantes en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Agradecemos la labor que ha realizado la Fiscalía y esperamos con interés el informe de la Corte Penal Internacional sobre las actividades relacionadas con los exámenes preliminares en 2019.

Las reivindicaciones del pueblo de Ucrania para que se haga justicia y, en especial, para que se enjuicie y se exijan cuentas a todos los autores de delitos graves cometidos en Ucrania siguen siendo tan pertinentes como siempre. En ese sentido, Ucrania reitera su apoyo incondicional a la Corte Penal Internacional. Para concluir, quisiera destacar el hecho de que la lucha contra la impunidad está directamente relacionada con el logro de la paz y la seguridad para todos.

Sra. Blais (Canadá) (*habla en francés*): El Canadá apoya desde hace mucho tiempo a la Corte Penal Internacional y sus esfuerzos por hacer que los responsables de los crímenes internacionales más graves rindan cuentas. Garantizar la rendición de cuentas por esos crímenes ayuda a poner fin a la impunidad, que está intrínsecamente relacionada con el respeto del estado de derecho. Nos suscita particular preocupación la impunidad en

Myanmar y, por ello, celebramos que la Corte esté examinando los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo rohinyá. Sin embargo, reconocemos las limitaciones inherentes al hecho de que la Corte deba permanecer dentro de los límites de su competencia. Por lo tanto, el Canadá sigue instando al Consejo de Seguridad a que remita la situación en Myanmar a la Corte Penal Internacional. Esa remisión garantizaría que la Corte tuviera competencia para investigar todo crimen atroz cometido contra el pueblo rohinyá.

Como la Corte ha señalado en su informe (véase A/74/324), la prerrogativa reconocida del Consejo de Seguridad de poder remitir una situación a la Corte permite promover la aplicación del principio de responsabilidad en los países en los que es posible que se hayan cometido crímenes graves, pero sobre los que la Corte carece de competencia. La Corte también señala que el diálogo estructurado entre esta y el Consejo de Seguridad podría mejorar la aplicación de las resoluciones del Consejo en materia de remisión de situaciones a la Corte y fortalecer la lucha contra la impunidad. Ese diálogo también podría contribuir a garantizar que la Corte Penal Internacional reciba financiación suficiente para ocuparse de las causas que le remita el Consejo. Por consiguiente, el Canadá respalda que se entable un diálogo estructurado con el Consejo de Seguridad.

Habida cuenta de la necesidad de una Corte sólida, el Canadá también acoge con beneplácito los debates en curso para encontrar posibles formas de fortalecer la Corte. En particular, acogemos con satisfacción los esfuerzos de la Mesa por convocar a los Estados partes con este fin. Si bien las esferas de debate son muchas, el Canadá apoya los esfuerzos tendientes a aumentar la diversidad y mejorar el equilibrio entre los géneros en la Corte, garantizar procesos nacionales sólidos en la selección de candidatos para puestos de elección dentro de la Corte y velar por una mejor asignación de recursos que permitan a la Corte cumplir su misión. Por lo tanto, el Canadá espera con interés colaborar con otros Estados partes sobre esas y otras cuestiones en la Asamblea de los Estados partes que se celebrará en diciembre.

Quisiera reiterar con brevedad que consideramos que la ratificación universal del Estatuto de Roma es fundamental para el éxito de la Corte. Dado que otras instancias están resultando menos eficaces de lo que se esperaba a la hora de garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces, nuestra prioridad debe ser seguir tratando de lograr la universalización del Estatuto de Roma. Al igual que la Corte, apreciamos enormemente los esfuerzos de la sociedad civil para promover esa

universalización. Sin embargo, también corresponde a todos los Estados partes plantear esta cuestión de forma periódica ante los Estados no partes, habida cuenta de la importante función que desempeña la Corte Penal Internacional en la lucha contra la impunidad.

La cooperación internacional también es esencial para el éxito de la Corte Penal Internacional. En ese sentido, el Canadá se hace eco de la profunda preocupación de la Corte por el hecho de que aún siguen pendientes las solicitudes de detención y entrega formuladas contra 15 personas. La Corte solo puede tener éxito en su labor si todos los Estados partes responden a las órdenes de detención y prestan asistencia a las investigaciones en curso. Por este motivo, Canadá acoge con satisfacción la pronta ejecución de dos nuevas órdenes de detención emitidas por la Corte en el año transcurrido por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en 2013 y 2014 en la República Centroafricana, y la entrega de esas personas para ponerlos a disposición de la Corte Penal Internacional. También acogemos con beneplácito la descripción de la cooperación que mantienen los Estados partes en las investigaciones. Solo trabajando de consuno, podemos exigir cuentas a los autores de crímenes internacionales graves.

Para concluir, quisiera recalcar que el Canadá seguirá prestando firme apoyo a la Corte Penal Internacional y aguarda con interés la continuación de los debates sobre los esfuerzos encaminados a reforzar la Corte Penal Internacional.

Sra. Pino Rivera (Cuba): La delegación de Cuba toma nota del informe del Secretario General (véase A/74/324), y desea expresar su firme compromiso en la lucha contra la impunidad de crímenes que afecten a la comunidad internacional.

La actual situación internacional, así como los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos años, demuestran de manera fehaciente la necesidad de una institución jurisdiccional internacional con autonomía, que conduzca la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves. No obstante, consideramos que las amplias facultades otorgadas al Consejo de Seguridad en virtud del Artículo 16 del Estatuto de Roma en relación con el trabajo de la Corte Penal Internacional, la coloca, no precisamente, como una institución independiente. Esta cuestión, además de desvirtuar la esencia de la jurisdicción de este órgano, viola los principios capitales de la independencia de los órganos jurisdiccionales y la transparencia e imparcialidad en la administración de justicia. Las remisiones realizadas a

la Corte por parte del Consejo de Seguridad confirman la negativa tendencia a la que nuestro país se ha referido en varias oportunidades. En los procesos de remisión del Consejo de Seguridad, se viola constantemente el derecho internacional y se ataca a países en desarrollo en nombre de una supuesta lucha contra la impunidad. Es por eso que Cuba reitera su posición a favor del establecimiento de una jurisdicción penal internacional imparcial, no selectiva, eficaz, justa, complementaria de los sistemas nacionales de justicia, verdaderamente independiente y, por tanto, exenta de subordinaciones a intereses políticos que puedan desvirtuar su esencia.

Cuba reitera que la Corte Penal Internacional no puede desconocer los tratados Internacionales y los principios del derecho internacional. La Corte debe respetar el principio de derecho relativo al consentimiento del Estado para obligarse por un tratado, lo cual queda refrendado en el artículo 11 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969. Cuba desea reiterar su seria preocupación por el precedente que se crea con las decisiones de la Corte de iniciar procesos judiciales contra nacionales de Estados no partes en el Estatuto de Roma, que ni siquiera han aceptado su competencia, de conformidad con el Artículo 12 del Estatuto. Por otra parte, la jurisdicción de la Corte debe mantenerse independiente de los órganos políticos de las Naciones Unidas y funcionar siempre de manera complementaria a las jurisdicciones penales nacionales. El Estatuto de Roma no fue creado para reemplazar a los tribunales nacionales.

La Corte Penal Internacional debe informar de sus actividades a la Asamblea General sobre la base de lo establecido en el Acuerdo de Relación. Cuba, aunque no es parte en la Corte Penal Internacional, está dispuesta a continuar participando activamente en los procesos de negociación relacionados con esta institución, en especial la resolución relativa al informe de la Corte Penal internacional, que cada año es aprobada por la Asamblea General y que actualmente la Asamblea tiene ante sí como proyecto de resolución A/74.L.8. Sin embargo, reiteramos la preocupación sobre los intentos de quebrantar el Acuerdo de Relación, en particular en lo relativo a la vinculación de la Corte con el Consejo de Seguridad. Llama la atención que en el informe contenido en el documento A/74/324 se hace referencia a la necesidad de estructuración de un diálogo entre ambos órganos, cuestión que consideramos excede los mandatos contenidos en el acuerdo de relaciones.

El pueblo de Cuba ha sido víctima de las más disímiles formas de agresión durante casi 60 años. El

hostigamiento y la agresividad han ocasionado a nuestro país miles de muertos y lesionados. Cientos de familias han perdido a sus hijos, padres y hermanos, además de las innumerables pérdidas materiales, económicas y financieras. Sin embargo, la definición del crimen de agresión alcanzada en la Conferencia de Examen del Estatuto de Roma, celebrada en Kampala, está muy lejos de considerar algunos de los elementos mencionados. La definición del crimen de agresión debe establecerse de manera genérica, que abarque todas las formas de agresión que se manifiestan en las relaciones internacionales entre los Estados y que no se circunscriben al uso de la fuerza armada, pero afectan igualmente la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de los Estados.

Para concluir, Cuba reafirma su voluntad de luchar contra la impunidad y mantiene su compromiso con la justicia penal internacional, el apego a los principios de transparencia, independencia e imparcialidad, así como la aplicación irrestricta y el respeto del derecho internacional.

Sr. Liu Yang (China) (*habla en chino*): La delegación de China da las gracias al Presidente, Sr. Chile Eboe-Osuji, por su informe anual (véase A/74/324) sobre la labor de la Corte Penal Internacional. China ha tomado nota de los constantes esfuerzos de la Corte Penal Internacional en ámbitos como la investigación, los juicios y la reparación para las víctimas. Sin embargo, los recelos en el plano internacional en relación con la autoridad y la credibilidad de la Corte han ido en aumento. A este respecto, hay cinco cuestiones principales. En primer lugar, no se ha respondido de manera eficaz a las principales inquietudes de algunos Estados partes en el marco de la Corte Penal Internacional. En segundo lugar, el enfoque de la Corte respecto de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado ha sido controvertido, y varios Estados consideran que sería prudente que la Asamblea General solicitara una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre esta cuestión. En tercer lugar, la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte ha ampliado su jurisdicción indebidamente, al punto de difuminar los límites entre los Estados partes y los Estados no partes. En cuarto lugar, al parecer, la Corte no tiene condiciones y criterios explícitos y uniformes para autorizar a la Fiscal a investigar una situación determinada. En quinto lugar, una magistrada aceptó un nombramiento como embajadora de su país sin dejar de participar en los juicios, lo que causó un escepticismo generalizado. Aunque se rectificó la situación fue rectificada con posterioridad, eso no debería haber ocurrido, en primer lugar, en un órgano judicial internacional, cuya razón

de ser se fundamenta en la necesidad de garantizar la independencia y la imparcialidad.

China también ha tomado nota del hecho de que el fallo de la Sala de Apelaciones de la Corte, dictado en mayo de este año, sobre una apelación de Jordania ha suscitado preocupaciones importantes entre diversas partes. El fallo, sustentado en las prácticas de los tribunales penales internacionales especiales, determinó la no aplicabilidad de la inmunidad de los Jefes de Estado ante las instituciones judiciales internacionales como norma de derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, la Corte no dio explicaciones detalladas sobre las distinciones relativas a los contextos y condiciones específicos de las prácticas de esos tribunales penales internacionales. Por ejemplo, los estatutos de los tribunales contienen disposiciones explícitas sobre la inmunidad de los Jefes de Estado, y en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad figuran disposiciones similares. Hemos visto en la práctica estatal que la gran mayoría de los Estados ha mantenido de manera sistemática e inequívoca que la inmunidad se aplica a los Jefes de Estado y otros altos funcionarios sin excepción. Además, las Salas de Cuestiones Preliminares y de Apelaciones de la Corte han dictado múltiples sentencias sobre cuestiones referentes a ese tema, pero han citado motivos que son diferentes o incluso contradictorios, en detrimento de la autoridad y credibilidad de la Corte.

China considera que la Corte debe adoptar medidas concretas y eficaces para subsanar sus deficiencias y mejorar su labor a fin de responder a los recelos y preocupaciones legítimos de la comunidad internacional acerca de la serie de cuestiones que he mencionado. China espera que la Corte ejerza cuidadosamente su autoridad, de estricta conformidad con el Estatuto de Roma, para garantizar que sus actividades judiciales se ajusten a los principios básicos del derecho internacional, incluidos los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, a fin de lograr verdaderamente la equidad y la justicia.

Sr. Jiménez Piernas (España): Es para mí un gran honor dirigirme de nuevo a la Asamblea General a propósito de una cuestión de la máxima trascendencia. Para España es una prioridad la consolidación de la Corte Penal Internacional, cuya función es investigar los crímenes más graves que afectan al conjunto de la comunidad internacional y juzgar a sus autores como jurisdicción de último recurso, complementaria de las jurisdicciones nacionales, con la pretensión de poner fin a la impunidad, impedir tales crímenes y proporcionar justicia a las víctimas.

Quisiera, en primer lugar, señalar que España, por supuesto, se suma a la intervención pronunciada anteriormente en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros.

Además, quiero celebrar la labor que viene desempeñando la Corte, porque la Corte sigue funcionando. En estos momentos hay once situaciones abiertas y otras once en fase preliminar. Hay causas que se encuentran en plena fase de apelación o pendientes de la fijación de la sentencia, o llegando a su fin, junto a nuevas causas en las que la Corte va avanzando. De toda esta labor da prueba el informe correspondiente al período comprendido entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019 (véase A/74/324), que ha sido presentado por el Presidente Eboe-Osuji. A él, a los magistrados, a la Fiscal Bensouda y a todo el personal de la Corte Penal Internacional les damos nuestro más sincero agradecimiento. La Corte es uno de los más grandes logros de la comunidad internacional. Desde la adopción del Estatuto de Roma, hace más de veinte años, los Estados hemos estado pendientes de las tareas de la Corte, tanto desde nuestras capitales como mediante nuestra participación en los distintos grupos de trabajo, comités y en las reuniones de la Asamblea de los Estados Partes. Esta atención es consecuencia de la trascendencia de su mandato, el componente político de su trabajo y el peso de su presupuesto en las finanzas de los Estados Partes.

Son muchos los retos a los que ahora se enfrenta la Corte. Sin duda, merece nuestra atención, entre otros, la puesta en marcha de un proceso de revisión de carácter técnico, por parte de expertos independientes, con el fin de mejorar el desempeño, la eficiencia y la eficacia de la Corte en algunos ejes fundamentales, en particular la gobernanza de la institución y el trabajo de la Fiscalía. El informe ha de presentarse en septiembre de 2020 para ser considerado por el decimonoveno período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes, casi coincidiendo con la culminación del proceso de elección de nuevos magistrados y del Fiscal. Merece destacar también la cooperación con los Estados Partes, la protección de las víctimas y la elección de los cargos de máxima responsabilidad. Vamos a ocuparnos de todo ello a continuación.

Es cierto que la Corte goza del apoyo decidido, aunque informado y crítico, de un grupo cada vez más nutrido de Estados, entre los que se cuenta, por supuesto, España. Sin embargo, la Corte se enfrenta hoy a una serie de retos, algunos viejos, otros nuevos, otros renovados, que dificultan la administración de la justicia frente a los crímenes más graves para la comunidad internacional en su conjunto. Lamentamos los obstáculos o dificultades

que viene sufriendo la Corte cuando intenta llevar a cabo sus funciones, en particular, las amenazas de represalias contra la Fiscal, que es la persona elegida para que persiga esos crímenes en nombre de la comunidad internacional. Se trata de ataques inaceptables porque persiguen coartar su libertad investigadora. En la sede de la Asamblea General, muchos Estados hemos reafirmado y seguiremos reafirmando nuestro decidido apoyo a la Corte, un instrumento clave en el desarrollo de la administración de justicia en el sistema universal. La Corte no es todavía una organización universal, pero vocación no le falta. Los Estados Partes y la sociedad civil siguen haciendo esfuerzos en esa dirección. Entretanto, nuestro principal objetivo debe ser ampararla para que trabaje sin injerencias indebidas de terceros y con todos los medios que necesita.

Participar en la Corte como Estado Parte tiene, por supuesto, la contrapartida de participar en su configuración y la de sus órganos. Sin embargo, hemos podido ver a lo largo de estos años cómo ciertos Estados han rehusado cooperar con la Corte, incluso en causas donde la Corte actúa a petición del Consejo de Seguridad, en su condición de garante de la paz y seguridad internacionales, conforme al Capítulo VII de la Carta. Tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para que esta falta de cooperación se reconduzca en las causas en que ya se ha producido y que no se repita en el futuro. Nos congratulamos, por tanto, de la reciente decisión de la Sala de Apelaciones relativa a la falta de cooperación con la Corte de un Estado Parte, puesto que refuerza el papel de la Corte frente a los Estados, especialmente —insisto— si se tiene en cuenta que en esa causa la jurisdicción de la Corte había sido activada por el Consejo de Seguridad.

Además, la cooperación con la Corte sigue siendo uno de los retos principales a los que debemos hacer frente, pero es también una oportunidad para demostrar nuestro apoyo a la Corte y el compromiso que tenemos con su funcionamiento. En los últimos años, se han celebrado acuerdos bilaterales de cooperación con la Corte, cuyo objetivo principal es tratar de desarrollar aspectos que en su día no fueron previstos por el Estatuto de Roma, pero que se han demostrado fundamentales para el buen desarrollo de los cometidos de la Corte. España negocia con la Corte en estos momentos la celebración de dos acuerdos de cooperación: un novedoso acuerdo de cooperación judicial, que permitirá articular una relación fluida y eficiente entre los órganos judiciales españoles y la Corte, y un acuerdo de ejecución de sentencias, que se enmarca dentro de los acuerdos habitualmente celebrados entre la Corte y los Estados partes.

Es casi obligatorio hacer referencia a las víctimas de los crímenes que enjuicia la Corte. La jurisprudencia de la Corte prueba hasta qué punto estamos ante un poder imparcial, nada sospechoso de tomar partido o de ignorar los derechos de cualesquiera de las partes en el proceso, pero las absoluciones, que son fruto de un sistema garantista, respetuoso de los derechos de todas las partes, suponen una comprensible frustración para las víctimas. Es imprescindible atenderlas y mejorar su estatus mediante la consolidación de la práctica de la asistencia gratuita financiada con el presupuesto de la Corte, sin olvidar el papel esencial que desempeña el Fondo Fiduciario para las Víctimas, al que España contribuye de modo regular en la medida de sus disponibilidades financieras. Bajo su mandato de asistencia, el Fondo ha ayudado ya a más de 400.000 víctimas, completando el pago de las reparaciones previstas en las sentencias de la Corte en los casos en que los condenados no puedan hacer frente a los pagos. Las contribuciones voluntarias al Fondo son esenciales para asegurar el derecho de las víctimas a una reparación, salvando así la eficacia del sistema creado en el Estatuto de Roma.

Me referiré, para terminar, a la cuestión siempre delicada de la elección de las personas que desempeñarán en los próximos años los puestos de máxima responsabilidad en la Corte. Sin perjuicio de los demás cargos, me ocuparé especialmente de la Fiscalía y de los magistrados. Se acerca un nuevo ciclo de elecciones, y es esencial que los nombramientos se guíen por la búsqueda y valoración de perfiles técnicos reconocidos. Las labores que desempeñarán en los próximos años las personas elegidas obligan a tratar de contar con candidatos que posean una amplia experiencia en la materia y solvencia técnica garantizada, por encima de otros criterios. Solo así podremos asegurar el éxito de las tareas de la Corte en el futuro.

La Corte Penal Internacional es una pieza fundamental del complejo sistema que la comunidad internacional viene construyendo desde 1945 para hacer del mundo un lugar mejor. Tenemos la responsabilidad no solo de mantener ese legado, sino de mejorarlo con nuestras acciones. Aprovechemos cada oportunidad que tengamos, como es el caso de las próximas elecciones de magistrados y de Fiscal, para fortalecer la Corte, sin perder de vista la importancia de su mandato para colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Sra. Azucena (Filipinas) (*habla en inglés*): Damos las gracias al Presidente de la Corte Penal Internacional por su informe (véase A/74/324). Filipinas se desvincula del proyecto de resolución A/74/L.8.

La retirada de Filipinas del Estatuto de Roma se hizo efectiva el 17 de marzo. Nuestra decisión de retirarnos es parte de la posición de principios de Filipinas frente a quienes politizan los derechos humanos y hacen caso omiso de los órganos y organismos independientes que en nuestro país funcionan adecuadamente, y que siguen ejerciendo su jurisdicción en las causas derivadas de nuestros esfuerzos por proteger a nuestro pueblo. Como en todas las democracias, las ruedas de la justicia a veces giran lentamente, pero giran. El estado de derecho no puede ni debe comprometerse para obtener una retribución inmediata. A pesar de nuestra retirada del Estatuto de Roma, Filipinas afirma su compromiso de luchar contra la impunidad en los casos de crímenes atroces. Tenemos una legislación nacional que castiga esos delitos. De hecho, este año celebramos el décimo aniversario de nuestra Ley sobre los Delitos contra el Derecho Internacional Humanitario, el Genocidio y Otros Crímenes de Lesa Humanidad.

Muchos olvidan convenientemente que el Estatuto de Roma se basa en el principio de complementariedad, no en el de sustitución. En el Estatuto se reconoce que los Estados tienen la responsabilidad y el derecho primordiales de enjuiciar los delitos internacionales, y que la Corte Penal Internacional puede ejercer su jurisdicción solo cuando los sistemas jurídicos nacionales fracasan o no pueden enjuiciar esos delitos. Tenemos la capacidad y la disposición. La Corte nunca fue concebida como un sustituto de los tribunales nacionales, como algunos quisieran que fuera. A principios de este año, un miembro del grupo terrorista Maute fue condenado en un tribunal de justicia por violaciones del derecho internacional humanitario, en lo que constituyó una muestra de la aplicación efectiva por Filipinas de su legislación nacional y del derecho internacional humanitario.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.